

Sobornos en servicios sociales y preferencias redistributivas en América Latina

Alejandra Armesto*

RESUMEN: ¿Cuáles son los efectos de las experiencias de soborno en servicios sociales sobre las preferencias redistributivas de los ciudadanos? La investigación sobre los efectos de retroalimentación de las políticas sociales se ha centrado en países desarrollados y ha ignorado el rol de las experiencias de corrupción sobre el apoyo a la redistribución en naciones en vías de desarrollo. La redistribución requiere capacidad estatal. La experiencia de pagar sobornos para usar servicios sociales mina las expectativas de los ciudadanos con respecto a la capacidad del Estado para proveer servicios sociales redistributivos de manera efectiva e imparcial en el futuro. El análisis de seis olas de encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) en 18 países latinoamericanos muestra que los individuos que deben pagar sobornos para acceder a servicios sociales están menos inclinados a apoyar la redistribución y la provisión pública de servicios de salud y que el efecto de los sobornos es más pronunciado entre los usuarios más pobres.

Palabras clave: corrupción, sobornos, preferencias redistributivas, servicios sociales, América Latina.

Bribes in Social Services and Redistributive Preferences in Latin America

ABSTRACT: What are the effects of paying bribes for public social services on citizens' redistributive preferences? Research about social policies feedback effects has focused on developed countries and has ignored the role of corruption experiences in redistributive preferences in developing nations. Redistribution requires state capacity. Paying bribes to use social services undermines confidence in state capacity to provide redistributive social services with impartiality in the future. Analysis of six waves of Latin American Public Opinion Project (LAPOP) surveys in 18 Latin American countries shows that individuals who had to pay bribes to access social services are less inclined to support redistribution and the public provision of health services and that these effects are stronger among poor users.

Keywords: corruption, bribes, redistributive preferences, social services, Latin America.

*Alejandra Armesto es profesora investigadora en la sede mexicana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Carretera Picacho-Ajusco 377, Ciudad de México, CDMX, 14200 México. Tel: (55) 3000 0200, ext. 379. Correo-e: alejandra.armesto@flacso.edu.mx. ORCID ID 0000-0003-4768-4764. Agradezco los comentarios de Mauricio Rivera, Daniel Rojas Lozano, Rodrigo Salazar, Jenniffer Vargas Reina y Bárbara Zárate-Tenorio, así como las generosas sugerencias de los revisores anónimos. Todos los errores son míos.

Artículo recibido el primero de mayo de 2021 y aceptado para su publicación el 1 de junio de 2021.

¿Cuáles son los efectos de las experiencias de soborno en servicios sociales sobre el apoyo a la redistribución? En los países en vías de desarrollo, millones de personas pagan sobornos para acceder a servicios sociales públicos como atención médica en centros de salud o educación en escuelas del Estado a los que formalmente tienen derecho (Bohorquez y Devrim, 2012), y en América Latina lo hacen dos de cada diez ciudadanos (Pring y Vrushi, 2019). Los estudios acerca de los efectos de retroalimentación de las políticas sociales han mostrado que el acceso a beneficios moldea el apoyo a la redistribución (Jordan, 2010; Larsen, 2008) y que las formas de implementación de los programas sociales afectan la confianza de los ciudadanos en las instituciones (Korpi y Palme, 2003; Soss, 2005; Soss y Schram, 2007). Esta literatura, centrada primordialmente en países desarrollados, ha ignorado los posibles efectos de las experiencias de corrupción sobre las actitudes políticas. Este artículo aborda esta laguna examinando empíricamente el efecto de los sobornos en servicios sociales sobre el apoyo a la redistribución en América Latina.

En lo que sigue argumento que pagar sobornos para acceder a servicios sociales incrementa el costo de los beneficios sociales para sus potenciales receptores (Bratton y Gyimah-Boadi, 2016; E.C. Chang y Yun-Han, 2006; Warren, 2006), reduce la satisfacción con tales servicios y socava las expectativas de los ciudadanos respecto a la capacidad del Estado para ofrecer políticas redistributivas de manera imparcial (Anderson y Tverdova, 2003; E. Chang y Chu, 2006; Meer y Hakhverdian, 2017). En consecuencia, las personas que han tenido que pagar sobornos para usar servicios sociales públicos serían menos proclives a apoyar la redistribución que quienes no han tenido experiencias de corrupción. Asimismo, dado que los efectos negativos de los sobornos —exclusión y menor calidad de los servicios— son más graves para los usuarios pobres, el impacto negativo de estas experiencias sobre el apoyo a la redistribución sería mayor entre los más pobres.

Pongo a prueba este argumento analizando seis olas de las encuestas de opinión pública del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) en 18 países latinoamericanos entre 2008 y 2018. Los hallazgos, consistentes con las hipótesis propuestas, indican que las personas que pagan sobornos para acceder a servicios sociales públicos de salud y educación están menos inclinadas a apoyar la redistribución del ingreso que quienes no han pagado sobornos. Estos hallazgos son robustos usando distintas medidas de las variables dependiente e independientes y diferentes especificaciones de los modelos.

Los países de América Latina ofrecen un contexto adecuado para estudiar los efectos de las experiencias de sobornos sobre las preferencias redistributivas por dos razones. En primer lugar, a pesar de la reducción de la desigualdad experimentada en las dos primeras décadas de este siglo (López-Calva y Lustig, 2010), Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo (Alvaredo y Gasparini, 2015; Gasparini *et al.*, 2011; Tornarolli *et al.*, 2018). Segundo, aunque en la región los sobornos en

los servicios públicos están extendidos, su incidencia varía ampliamente entre los países. De acuerdo con datos del Global Corruption Barometer, mientras en Costa Rica solamente 7 por ciento de los encuestados reporta haber pagado un soborno para acceder a servicios básicos, en México la cifra de personas sobornadas llega a 34 por ciento y en Venezuela a 50 por ciento (Pring y Vrushi, 2019).¹

El siguiente apartado presenta una breve discusión de literatura acerca de los efectos de retroalimentación de las políticas sociales sobre las actitudes hacia la redistribución. Luego desarrollo el argumento para dar cuenta de los efectos de las experiencias de sobornos en servicios sociales sobre las preferencias redistributivas. Un tercer apartado describe los datos y métodos utilizados. La cuarta sección presenta los resultados de los modelos, de las pruebas de robustez y de pruebas adicionales para sondear el mecanismo. Las conclusiones resumen los hallazgos y discuten algunas vías para futuras investigaciones.

EFFECTOS DE RETROALIMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PREFERENCIAS REDISTRIBUTIVAS

La cuestión de si un gobierno debe o no redistribuir el ingreso, y en qué medida, es probablemente la línea divisoria más importante entre la izquierda y la derecha políticas, al menos en temas económicos (Alesina y Giuliano, 2011). Las actitudes de los ciudadanos respecto al papel del gobierno en la redistribución de los recursos constituyen un insumo crucial para la competencia política (Baker y Greene, 2011) y los programas de política pública impulsados por las instituciones (Hicks y Swank, 1984).

¿Por qué algunas personas apoyan la redistribución más que otras? Dentro de la vasta literatura que responde esta pregunta hay dos enfoques principales (Gingrich y Ansell, 2012). El primero sostiene que la posición económica de los ciudadanos —su ingreso o los riesgos de su situación laboral— configuran sus actitudes hacia las políticas del estado de bienestar (Anderson y Pontusson, 2007; Cusack, Iversen y Rehm, 2006; Iversen y Soskice, 2001; Kitschelt y Rehm, 2014; Moene y Wallerstein, 2001; Rehm, 2009). El supuesto básico de esta literatura de economía política es que las preferencias políticas descansan sobre los intereses económicos: los pobres están a favor de la redistribución y los sectores de ingresos altos, en contra, por la mayor recaudación de impuestos que les implicaría (Meltzer y Richard, 1981a); a su vez, los trabajadores con empleos precarios, que enfrentan más riesgos laborales (aunque no necesariamente menos ingresos), apoyan la intervención del Estado para proveer una seguridad sólida (Kitschelt y Rehm, 2014; Rehm, 2009). Este enfoque no daría cuenta adecuadamente de las preferencias redistributivas en América Latina, donde

¹ Un soborno es un intercambio entre un funcionario público y un individuo en el cual el funcionario obtiene un beneficio material y el individuo obtiene acceso a un servicio (Transparency International, 2009).

los pobres no siempre son más proclives a apoyar la redistribución (Dion y Birchfield, 2010; Haggard *et al.*, 2013; Kaufman, 2009). Las respuestas para este enigma apuntan a la experiencia de baja movilidad social (Gaviria *et al.*, 2007), a la superposición de desigualdades económicas y étnicas, a la debilidad o ausencia de partidos programáticos que enfatizen los conflictos distributivos (Morgan y Kelly, 2017), o a los limitados beneficios del estado de bienestar para los más pobres (Holland, 2018), entre otras explicaciones (Salazar Méndez y Domingues Waltenberg, 2018).

Un segundo enfoque explica las preferencias redistributivas como consecuencia de los efectos de retroalimentación de las políticas sociales (Mettler y Soss, 2004). Los programas sociales de los estados de bienestar moldean las preferencias de los beneficiarios en favor de la redistribución (Korpi y Palme, 1998; Kumlin, 2004; Larsen, 2008; Svallfors, 2010); generan grupos específicos de beneficiarios que se convierten en sus defensores (Busemeyer y Goerres, 2020; Fernández y Jaime-Castillo, 2012; Pierson, 1994, 1996) y vinculan a los ciudadanos con el Estado (Corman *et al.*, 2017; Druckman *et al.*, 2018). Los efectos de retroalimentación pueden ser positivos o negativos y dependen del diseño de las políticas (Bruch *et al.*, 2010; Campbell, 2012; Ingram y Schneider, 1993). La investigación en democracias industriales avanzadas ha mostrado, en primer lugar, que los programas sociales universales contribuyen a incrementar la confianza interpersonal, el capital social y la solidaridad, además del interés de los beneficiarios en mantener o aumentar sus beneficios (Kumlin y Rothstein, 2005); y en segundo lugar, que las experiencias negativas con los funcionarios que implementan los programas —por ejemplo, los trabajadores sociales que verifican la elegibilidad para los programas— pueden tener efectos negativos sobre la eficacia política, la participación y la confianza de los ciudadanos en el gobierno (Bugge, 2020; Lerman y McCabe, 2017; Schneider e Ingram, 1993; Soss, 1999; Soss y Schram, 2007; Theiss y Kurowska, 2018).

La investigación sobre los efectos de retroalimentación de políticas sociales se ha desarrollado principalmente en el contexto de países desarrollados (Béland y Schlager, 2019) y no ha abordado el fenómeno de la corrupción que con frecuencia obstaculiza el acceso a beneficios de servicios públicos en los países en vías de desarrollo. La siguiente sección propone un argumento acerca de los efectos de retroalimentación de las experiencias de sobornos para acceder a servicios sociales sobre el apoyo a las políticas redistributivas.

SOBORNOS EN SERVICIOS SOCIALES, PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD ESTATAL Y PREFERENCIAS REDISTRIBUTIVAS

La redistribución requiere capacidad estatal para extraer recursos de la sociedad y reasignarlos a otros actores sociales (Centeno *et al.*, 2017; Soifer, 2013). La extracción de recursos a través de la recaudación impositiva implica capacidad estatal para conocer los activos y la riqueza generada, evaluar su valor y hacer que los ciudadanos

cumplan con el pago de sus impuestos (Besley y Persson, 2009; Brambor *et al.*, 2020; Lieberman, 2003). La asignación de los recursos a redistribuir descansa en la capacidad del Estado para conocer las necesidades y los riesgos de la población, identificar a la población objetivo de la asignación (Hunter y Brill, 2016), y proveer los beneficios y servicios de manera eficaz e imparcial (D’Arcy y Nistotskaya, 2016; Kwon, 2011).

Las experiencias de interacción con los funcionarios y organizaciones del Estado que proveen políticas sociales proporcionan a los ciudadanos evidencia del desempeño de los servicios públicos (Lipsky, 2010) y contribuyen a moldear sus creencias acerca de la capacidad estatal para proveer tales servicios (Calzada y del Pino, 2008; Larsen, 2020).² Por ejemplo, en Suecia, Bendz (2017) muestra cómo las experiencias con servicios de salud afectan las actitudes hacia su privatización, y Kumlin y Rothstein (2005) muestran que las experiencias personales positivas con servicios públicos de salud se asocian con un mayor nivel de confianza institucional.

Tener que pagar sobornos para acceder a servicios sociales públicos forma en los usuarios una evaluación negativa de la capacidad del Estado para ofrecer estos beneficios (Bratton y Gyimah-Boadi, 2016; Christensen y Læg Reid, 2005; Habibov, 2016; Langseth y Michael, 1998; Martin *et al.*, 2020; Sabet, 2013).³ El cobro de sobornos por funcionarios de bajo rango al interactuar con ciudadanos comunes condiciona el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios básicos de salud, educación o administrativos (Lepisto y Kazimzade, 2008; Miller *et al.*, 2000; Rose-Ackerman, 2010; Ruhl, 2011) a los cuales los hogares tienen derecho y por los cuales ya han pagado mediante impuestos y aranceles (Shleifer y Vishny, 1993).⁴ Estos intercambios pueden ser iniciados por el funcionario que solicita el soborno a cambio de proporcionar un bien o servicio o por el ciudadano que busca acceso a un servicio del Estado controlado por el funcionario (Liu y Sun, 2012; Stringhini *et al.*, 2009).⁵ Estudios obser-

² Estudios recientes han mostrado que las experiencias personales forman actitudes políticas. Las experiencias de desempleo o las consecuencias económicas de las recesiones moldean actitudes acerca del rol del Estado en la economía (Blekesaune, 2013; Margalit, 2013). Las actitudes políticas relacionadas con el medio ambiente, también están moldeadas en parte por las experiencias individuales: la exposición a incendios forestales se asocia a actitudes favorables a políticas de protección del medio ambiente (Hazlett y Mildenerger, 2020) y las experiencias de condiciones meteorológicas locales extremas se asocian a una mayor preocupación por el cambio climático (Egan y Mullin, 2012).

³ La corrupción pública es un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público debido a ganancias pecuniarias o de estatus privado, ya sea personal, familiar o para la camarilla a la que se pertenece, e incluye la corrupción política, que se refiere a los abusos cometidos por políticos, electos, y la corrupción administrativa que comprende los sobornos por parte de funcionarios públicos de rango mediano y bajo (Kaufmann, 1997; Nye, 1967; Philp, 2015).

⁴ Los sobornos que cobran los funcionarios de bajo rango pueden originarse en acciones corruptas descentralizadas o ser parte de un esquema centralizado de recaudación ilegal (DeHart-Davis, 2007; Gingrich y Ansell, 2012).

⁵ Los sobornos a nivel de calle también pueden implicar acciones que violan las reglas —regalos para aprobar los cursos (Zhllima *et al.*, 2018) o para asegurar el acceso a escuelas prestigiosas cuando no se tienen los méritos (Ruan, 2019)—. Sin embargo, en general el pago de sobornos para acceder a servicios

vacionales y experimentales han mostrado que las experiencias de corrupción en la interacción con agencias del Estado tienen un impacto negativo sobre la evaluación que los ciudadanos hacen de su desempeño y de su capacidad institucional (Caillier, 2018; Habibov, 2016; Habibov *et al.*, 2019).

Las experiencias de corrupción socavan las expectativas respecto a que los actores políticos y las organizaciones del gobierno puedan implementar las políticas de acuerdo con los procedimientos públicos y alcanzar los resultados prometidos en términos de beneficios para la población en general (Warren, 2006). Una amplia evidencia empírica muestra que la corrupción tiene un efecto negativo sobre la confianza institucional y política de los ciudadanos en países desarrollados (E.C. Chang y Yun-Han, 2006; Inoguchi, 2002; Solé-Ollé y Sorribas, 2017), así como en naciones en vías de desarrollo y en América Latina (Almeida-Santos *et al.*, 2018; Morris y Klesner, 2010).

La evaluación que los ciudadanos hacen de la capacidad institucional del Estado es un determinante clave detrás de las preferencias sobre el rol del Estado y el apoyo a la redistribución (Hetherington, 2005; Rothstein *et al.*, 2012; Rothstein y Stolle, 2003). Cuando las experiencias de los ciudadanos con el Estado sugieren que este no tiene capacidad para proveer servicios sociales de manera eficaz e imparcial, la probabilidad de que apoyen las políticas redistributivas es menor que cuando las experiencias con los servicios del gobierno muestran su eficiencia e imparcialidad (Kumlin, 2004). En Europa, la percepción de las instituciones del Estado como eficientes e imparciales está asociada al apoyo a un gasto social más alto y a una mayor disposición a pagar impuestos (Camussi *et al.*, 2018; Svallfors, 2013; Yamamura, 2014). En países en desarrollo o en transición las bajas expectativas respecto a las capacidades del Estado para recaudar impuestos y proveer servicios a la población conducen a una menor disposición a pagar impuestos redistributivos o progresivos para financiar servicios públicos en áreas como educación, salud, combate a la pobreza (Berens y Schiller, 2017; Brautigam *et al.*, 2008; Habibov *et al.*, 2018; Riesco y Draibe, 2007) y a una menor demanda de redistribución. Por ejemplo, en Indonesia, Kyle (2018) encuentra que las personas que han sido víctimas de sobornos con funcionarios locales se oponen a reemplazar subsidios por políticas focalizadas que les beneficiarían más porque desconfían de la burocracia local.

En suma, el apoyo a la redistribución depende de las expectativas que los ciudadanos tengan acerca de la capacidad de las agencias que implementan las políticas redistributivas para hacerlo de una manera eficiente y no corrupta (Rothstein *et al.*, 2012). Las experiencias de sobornos afectan negativamente la evaluación de la capacidad estatal por parte de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos no esperan que

básicos difiere del marco de la gran corrupción donde quienes hacen los pagos buscan obtener acceso a un trato especial y no a un servicio al que se tiene derecho (Justesen y Bjørnskov, 2014).

el gobierno pueda implementar las políticas de manera eficaz, es probable que su apoyo a tales políticas se reduzca (Jacobs y Matthews, 2017). Este argumento conduce a la siguiente hipótesis:

H1: Las personas que deben pagar sobornos para poder acceder a servicios sociales públicos son menos proclives a apoyar la redistribución del ingreso que aquellas que no han pagado tales sobornos.

Los sobornos en servicios sociales no afectan de forma homogénea a los usuarios con diferentes niveles de ingreso: *a)* los usuarios pobres reciben más solicitudes de sobornos, *b)* cuando los pagan, estos representan una porción del ingreso mayor que para los ricos, y *c)* cuando no los pagan, pueden quedar excluidos del servicio o recibir uno de peor calidad.

Para obtener servicios en áreas donde no hay monopolio estatal, los usuarios, en principio, pueden elegir entre la oferta pública, donde corren el riesgo de recibir solicitudes de sobornos, o recurrir a otros proveedores —organizaciones no gubernamentales o privadas (Klitgaard, 1988)—. Los usuarios más ricos pueden buscar alternativas en el sector privado mientras los ciudadanos más pobres, que tienen menos posibilidades de afrontar los gastos que implica este sector, son más dependientes de la oferta pública (Justesen y Bjørnskov, 2014). Peiffer y Rose (2018) muestran que, en África, los hogares más pobres son objeto de solicitudes de sobornos con más frecuencia que los ricos porque tienen más contacto con la oferta gubernamental de servicios sociales. Cuando reciben solicitudes de sobornos los usuarios ricos tienen un mayor poder de negociación (Robinson y Seim, 2018) y conocen los mecanismos para denunciarlos (Deininger y Mpuga, 2005), lo que les permite negarse a pagarlos (Emran *et al.*, 2020).

Segundo, los sobornos representan una porción del ingreso del hogar mayor para los pobres que para los ricos. Cuando los funcionarios responsables de la provisión de los servicios sociales cobran sobornos a los usuarios el costo de acceso aumenta (Kaufmann *et al.*, 2008). Los usuarios con ingresos más altos tienen una mayor capacidad para responder a las solicitudes de sobornos, están más dispuestos a pagarlos porque valoran su tiempo y hasta es posible que paguen más sobornos que los usuarios pobres porque están en contacto con más servicios y oficinas públicas (Hunt y Laszlo, 2012). Sin embargo, aunque los ricos destinen más recursos al pago de sobornos, estos representan una proporción menor de sus ingresos en comparación con el peso de los sobornos para los hogares pobres (Kaufmann *et al.*, 2008). El estudio de Emran y sus coautores (2020) muestra que en Bangladesh los sobornos en las escuelas afectan de manera desproporcionada a los hogares pobres y que entre los usuarios que pagan los sobornos, pobres y ricos desembolsan montos similares.

Y tercero, el costo adicional de los sobornos para poder usar los servicios del Estado puede llevar a que los usuarios más pobres no los paguen y entonces accedan a

un servicios de menor calidad (Hunt *et al.*, 2006) o sean excluidos de los mismos (Falkingham *et al.*, 2010; Jain, 1998), o que ni siquiera intenten acceder a los servicios, aunque los necesiten, porque esperan que no los atiendan o porque no pueden pagar los cobros ilegales (Deininger y Mpuga, 2005; Kaufmann *et al.*, 2008).

Como consecuencia de las implicaciones económicas y de baja calidad o exclusión de los servicios más graves de los sobornos para los usuarios de bajos ingresos, estos están sistemáticamente menos satisfechos con la oferta pública. Por ejemplo, en Uganda, Deininger y Mpuga (2005) encuentran que solo 2 por ciento de los usuarios en los quintiles más bajos está satisfecho con los servicios de salud, educación, seguridad pública y administrativos comparado con 6 por ciento de satisfechos en el quintil más alto.

Dado que las implicaciones de la corrupción en servicios públicos son más negativas para los usuarios pobres que para los más acomodados, sería esperable que el efecto negativo de las experiencias de soborno en servicios sociales sobre las preferencias redistributivas sea más pronunciado entre los usuarios pobres. Estas consideraciones sugieren una segunda hipótesis:

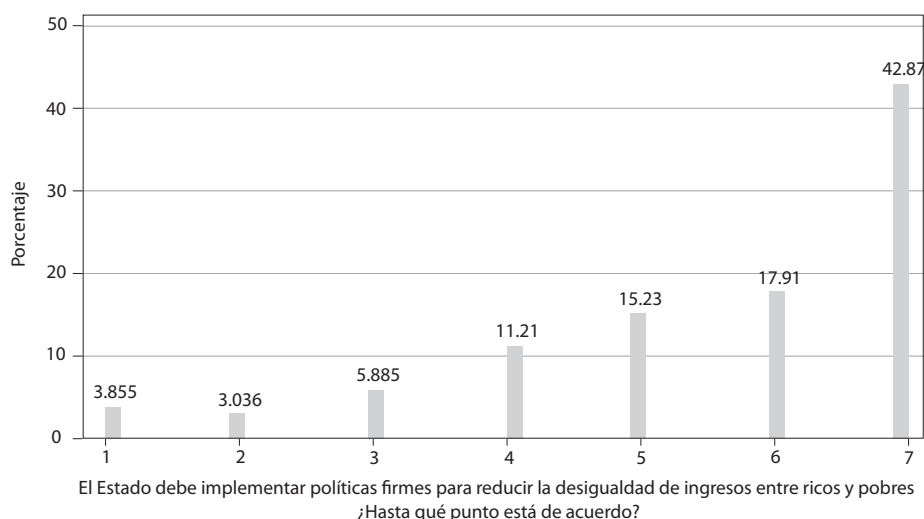
H2: El efecto negativo de los sobornos sobre la probabilidad de apoyar la redistribución será mayor entre las personas con ingresos más bajos que entre las personas de ingresos medios y altos.

DATOS

Para poner a prueba las hipótesis propuestas utilizo datos de las encuestas nacionales bianuales del Barómetro de las Américas entre 2008 y 2018 en 18 países de América Latina porque los cuestionarios de estas ondas incluyen preguntas para medir la variable dependiente, el apoyo a la redistribución. Cada dos años desde 2004, las encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt miden actitudes y comportamientos políticos utilizando muestras probabilísticas nacionales de adultos en edad de votar.

VARIABLE DEPENDIENTE

Para medir la variable dependiente, el *Apoyo a la redistribución*, uso las respuestas a la pregunta de LAPOP: ROS4. “El estado debe implementar una política sólida para reducir la desigualdad de ingresos entre los ricos y los pobres. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?” Las respuestas a esta pregunta varían entre 1 y 7. En América Latina, los ciudadanos tienen en general actitudes muy favorables hacia la redistribución. Como puede verse en la gráfica 1, en promedio entre los años 2008 y 2018, cerca de 43 por ciento de los encuestados escogió el valor máximo en la escala. Considerando este alto apoyo a la redistribución, sigo la práctica de trabajos previos sobre preferencias redistributivas en América Latina (Cramer y Kaufman, 2011; Holland, 2018; Morgan y Kelly, 2017) y distingo entre

GRÁFICA 1. Preferencias redistributivas en América Latina, 2008-2018

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas a la pregunta: El estado debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>

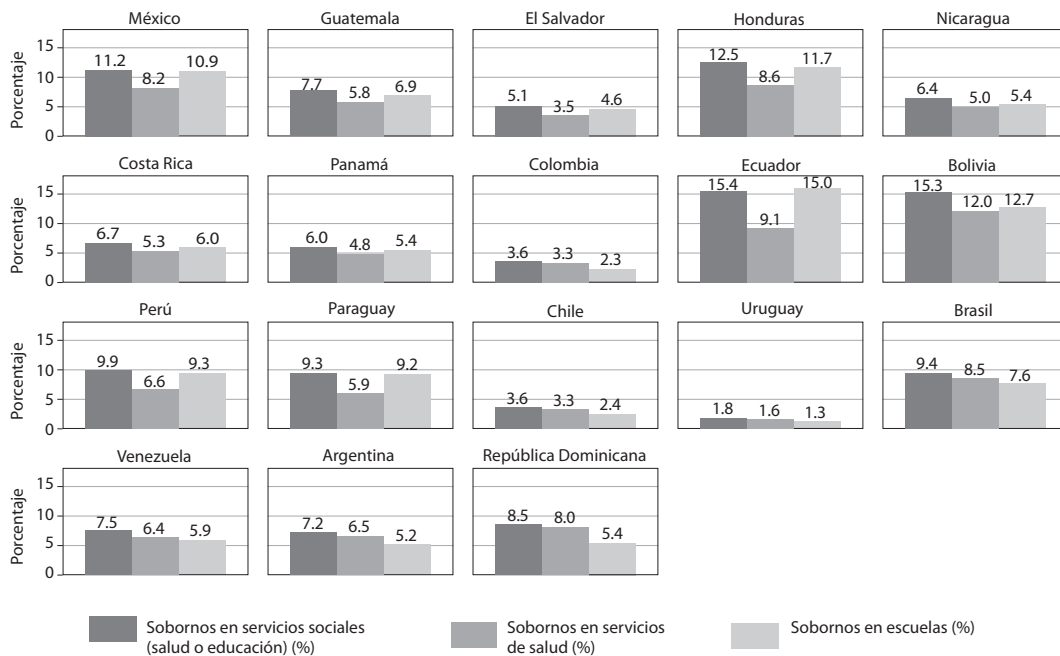
quienes tienen preferencias altamente favorables a la redistribución y quienes no al codificar las respuestas 6 y 7 como apoyo a la redistribución (valor 1) y todas las demás respuestas como no apoyo (valor 0).⁶

VARIABLES INDEPENDIENTES

El principal predictor a nivel individual es *Experiencias de sobornos en servicios sociales* que captura el pago de sobornos para acceder a este tipo de servicios. Para medir esta variable considero las experiencias reportadas por los encuestados (Charron, 2016) y construyo un índice con las respuestas a las preguntas sobre pagos de sobornos en los dos servicios sociales sondeados por las encuestas de LAPOP: educación y salud. Utilizo las siguientes preguntas: EXC15. “En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que pagar alguna mordida (o soborno) para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud?” (1 sí / 0 no) y EXC16. “En los últimos 12 meses, ¿tuvo que pagar alguna mordida (o soborno) en la escuela o colegio?” (1 sí / 0 no). Para los encuestados que respondieron “sí” a cualquiera de las dos preguntas codifico la variable *Experiencias de sobornos* como “1” y para quienes respondieron “no” a las dos preguntas la codifico como “0”.

En las seis ondas de encuesta analizadas, cerca de 70 por ciento de los encuestados reporta haber utilizado los servicios de salud o de educación, entre quienes

⁶ Como pruebas de robustez he estimado los modelos con la medida original entre 1 y 7 y los resultados son consistentes con los de los modelos estimados con la variable dicotómica. Estos resultados se reportan en el Apéndice.

GRÁFICA 2. Experiencias de soborno para acceder a servicios de salud o educación en América Latina, 2008-2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>.

20 por ciento debió pagar un soborno para acceder a los mismos. Sin embargo, como muestra la gráfica 2, la incidencia de los sobornos varía ampliamente entre los países de América Latina. Por ejemplo, en el extremo más alto, los sobornos afectan a 15 por ciento de los encuestados en Ecuador y Bolivia, y en el más bajo, a menos de 2 por ciento de los entrevistados en Uruguay.

Para medir la segunda variable independiente, el *ingreso*, sigo la práctica convencional de los estudios de países en desarrollo, utilizando una medida de *Riqueza patrimonial* que considera la presencia de bienes de consumo en el hogar del encuestado.⁷ Construyo el índice especificando un análisis de componentes principales por encuesta (país-año) con respuestas a preguntas sobre la presencia de los siguientes elementos: televisión, refrigerador, teléfono convencional, teléfono celular, vehículo/automóvil, lavadora, horno de microondas, motocicleta, drenaje, baño en la vivienda y computadora.

⁷ En los países en vías de desarrollo, las medidas de pobreza o riqueza basadas en los ingresos en las encuestas de opinión pública son poco confiables por fluctuaciones en el ingreso monetario a corto plazo y hasta falta de ingresos en efectivo en sectores rurales. Las medidas de bienestar basadas en la propiedad de los activos de los hogares no sufren estas limitaciones (Baldwin y Huber, 2010).

VARIABLES DE CONTROL

Incluyo una serie de variables para controlar por factores económicos, además del ingreso o riqueza patrimonial, que afectarían el apoyo a la redistribución (A. Meltzer y S. Richard, 1981b). El *Desempleo* (Rehm, 2009) medido con las respuestas a la pregunta de LAPOP: OCUP4A. “¿A qué se dedica usted principalmente?” y las recodifico como 1 (Desocupado para la categoría “Está buscando trabajo activamente”) y 0 (todas las otras categorías). Las *Evaluaciones del desempeño económico individual y nacional*, evaluaciones de bolsillo y sociotrópicas (Newman, 2014; Sachweh, 2018), usando las preguntas: SOCT2: “¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace doce meses?” e IDIO2. “¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?”

La *Ideología* política está asociada a las preferencias redistributivas (Alesina y Giuliano, 2011), por lo que incluyo respuestas a la pregunta: L1. “Cambiano de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se habla de tendencias políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala?”

La *Religión* puede afectar negativamente la demanda de redistribución, proporcionando sustitutos a la provisión estatal de beneficios (Scheve y Stasavage, 2006) o incorporando una dimensión moral al cálculo de los individuos que los induce a actuar en contra de sus intereses económicos (De La O y Rodden, 2008). Controlo por este factor incluyendo respuestas a la pregunta: Q5B. “Por favor, ¿podría decirme qué tan importante es la religión en su vida?”

La *Educación* puede reducir el apoyo a la redistribución, por una parte porque afecta la probabilidad de obtener mayores ingresos (Bullock, 2020; Busemeyer, 2013) y, por el contrario, también podría afectar positivamente el apoyo a la redistribución porque los ciudadanos más educados pueden tener más conocimiento de las posibles consecuencias negativas de la desigualdad (Rueda y Stegmüller, 2016). Mido la educación como el número de años de estudio reportados en respuesta a la pregunta de LAPOP ED.

La *Residencia urbana* puede afectar las preferencias redistributivas por al menos dos razones. Las ciudades proporcionan oportunidades para una mayor visibilidad de los conflictos distributivos. En las ciudades, los trabajadores encuentran una mayor densidad organizacional y más expresiones de acción colectiva, que contribuyen a la formación de conciencia de clase y al apoyo a la redistribución (Haggard *et al.*, 2013). Segundo, las ciudades ofrecen un mayor acceso a los beneficios de políticas de servicios básicos y redistributivas y los beneficiarios de la redistribución son más proclives a apoyarla (Holland, 2018; Pierson, 1996).

CUADRO 1. Estadísticas descriptivas

Variable	N	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
Apoyo a la redistribución (ROS4)	167 722	5.561	1.678	1	7
Preferencias redistributivas (ROS4, 6 y 7 =1)	167 722	.607	.488	0	1
Sobornos servicios sociales	152 486	.070	.238	0	1
Riqueza patrimonial	224 765	.510	.261	0	3
Desempleado	171 568	.075	.262	0	1
Situación económica personal	203 084	2.132	.712	1	3
Situación económica nacional	204 470	2.292	.721	1	3
Ideología	180 051	5.574	2.609	1	10
Religiosidad	142 425	0.621	0.485	0	1
Educación	210 990	9.171	4.559	0	18
Urbano	224 971	.694			
Niños en el hogar	224 971	.957	.201	0	1
Mujer	224 956	.512	.499	0	1
Edad	224 540	3941	16.045	16	112

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>.

Finalmente, incluyo controles sociodemográficos: sexo, edad, el término cuadrático de la edad y la presencia de menores en el hogar. Para capturar esta última variable, recodifico las respuestas a la pregunta: Q12BN. “¿Cuántos niños menores de 13 años viven en este hogar?”, en 1 para la presencia de uno o más menores y 0 para su ausencia. El cuadro 1 presenta las estadísticas descriptivas de todas las variables.

MÉTODO

Para poner a prueba las hipótesis propuestas específico regresiones logísticas porque la variable dependiente es dicotómica. Todos los modelos son estimados con efectos fijos por país y año de la encuesta con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio. Los efectos fijos de país y año controlan la variación entre países de modo que los modelos toman en cuenta la variación entre países en los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, la corrupción y las instituciones políticas. La estimación del efecto causal de las experiencias de soborno para acceder a servicios sociales podría plantear problemas de endogeneidad por sesgo por variable omitida. Factores no observados podrían propiciar simultáneamente que los individuos sean más proclives a reportar sus experiencias de sobornos y que se opongan a la redistribución. Podríamos pensar que las personas que se oponen a la redistribución son más desconfiadas del Estado y también son más sensibles a las solicitudes de sobor-

nos por parte de funcionarios públicos y las reportan con más frecuencia y que quienes apoyan la redistribución confían más en el Estado, son menos sensibles a los sobornos y están menos inclinados a reportarlos. A fin de atender esta posible fuente de sesgo construyo muestras emparejando individuos muy similares en covariables observables excepto en la experiencia de soborno en servicios sociales (Ho *et al.*, 2007). Construyo las muestras emparejadas usando el procedimiento de vecino más cercano incluyendo en las estimaciones un conjunto de variables asociadas a la probabilidad de ser sobornado en estos servicios: *a*) la riqueza patrimonial, porque las personas más pobres son más vulnerables a solicitudes de sobornos (Emran *et al.*, 2020; Fried *et al.*, 2010; Mbate, 2018; Peiffer y Rose, 2018); *b*) la presencia de menores en el hogar porque tienen un mayor contacto con los servicios sociales y una mayor probabilidad de ser víctimas de sobornos (Rose y Peiffer, 2013); *c*) el capital político porque opera como un disuasor de la solicitud de sobornos (Robinson y Seim, 2018),⁸ y *d*) el tamaño de la localidad de residencia, urbana o rural, porque la probabilidad de ser sobornado para acceder a un servicio es menor en localidades pequeñas donde las relaciones de confianza restringen la acción oportunista de los funcionarios (Hunt, 2004; Korosteleva *et al.*, 2020; Mocan, 2008).

La estrategia de emparejamiento con este conjunto de factores observables asociados con la probabilidad de sobornos contribuye a asegurar que estamos comparando pares de individuos que se parecen entre sí en casi todos los aspectos pertinentes para la experiencia de sobornos, excepto en la variable crucial de si efectivamente debieron pagar sobornos o no para acceder a servicios sociales. Con las muestras emparejadas solo estaríamos comparando los individuos que han debido pagar sobornos para acceder a servicios sociales —que podrían constituir el “grupo de tratamiento”— con individuos muy similares que no han pagado sobornos. En lo que sigue, todos los modelos para poner a prueba las hipótesis, así como las pruebas de robustez y de exploración del mecanismo, son estimados con estas muestras emparejadas.

RESULTADOS

El cuadro 2 presenta los resultados de los modelos estimados. El modelo 1 corresponde a la estimación de una regresión logística con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados por municipio sin ninguna variable de con-

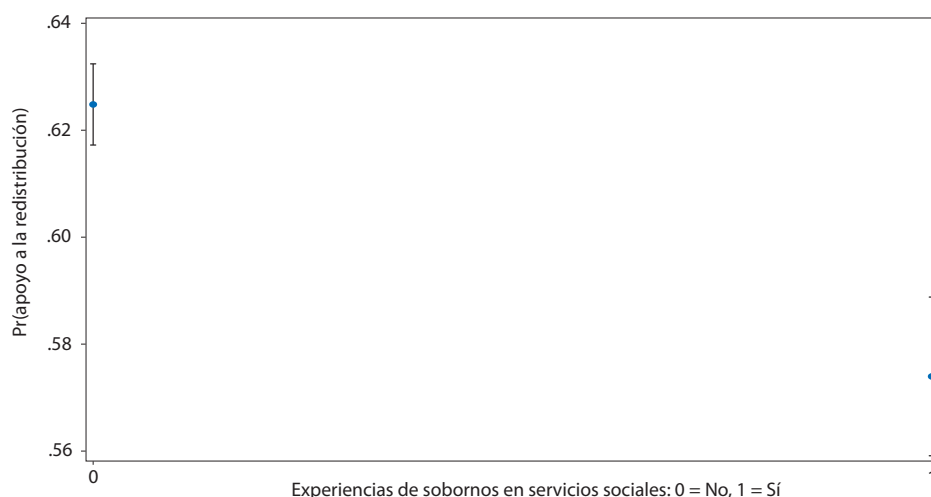
⁸ Para medir el capital político construyo un índice aditivo con las respuestas a las siguientes preguntas de involucramiento político: NP1. “¿Ha asistido a un cabildo abierto o una sesión municipal/delegacional durante los últimos 12 meses?”; NP2. “¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario, concejal o síndico de la municipalidad durante los últimos 12 meses?”; CP2. “¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido usted ayuda o cooperación a algún diputado del Congreso?”; CP4. “¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido usted ayuda o cooperación a algún ministerio/secretaría, institución pública u oficina del Estado?”; CP4A. “¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido usted ayuda o cooperación a alguna autoridad local como el intendente o concejal?”; CP13. “Asiste a ¿reuniones de un partido o movimiento político?”

CUADRO 2. Experiencias de soborno y apoyo a la redistribución

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Sobornos	-0.245*** (0.035)	-0.235*** (0.040)	-0.223*** (0.040)
Riqueza patrimonial		-0.064 (0.069)	-0.219*** (0.078)
Desempleado		0.110** (0.051)	0.097* (0.052)
Situación económica personal (= igual)		-0.094** (0.039)	-0.095** (0.039)
Situación económica personal (= peor)		-0.097** (0.043)	-0.090** (0.043)
Situación económica nacional (= igual)		-0.219*** (0.043)	-0.223*** (0.043)
Situación económica nacional (= peor)		-0.207*** (0.046)	-0.204*** (0.046)
Ideología		-0.017*** (0.005)	-0.016*** (0.005)
Religión		0.215*** (0.030)	0.227*** (0.030)
Educación			0.019*** (0.004)
Urbano			-0.041 (0.040)
Niños en el hogar			0.060 (0.112)
Mujer			-0.062** (0.026)
Edad			0.006 (0.006)
Edad ²			-0.000 (0.000)
Constante	0.940*** (0.068)	1.214*** (0.096)	0.989*** (0.185)
Observaciones	35 365	28 495	28 495
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos año	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018. Disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es apoyo a la redistribución; 1 = apoya la redistribución; 0 = no apoya la redistribución. Recodifico la variable ROS4: 1-5 = 0, 6-7 = 1. Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

GRÁFICA 3. Efecto de las experiencias de sobornos en servicios sociales sobre el apoyo a la redistribución. Efectos marginales con ic de 90 por ciento



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. Se basa en la estimación del modelo 3.

trol, el modelo 2 incorpora los controles económicos e ideológicos y el modelo 3 suma controles sociodemográficos. En todos los modelos, las personas que han pagado sobornos para acceder a servicios sociales, de educación, de salud o ambos, son significativamente menos proclives a apoyar la redistribución que quienes no lo han hecho. Estos resultados son robustos a especificaciones con dos medidas alternativas de la variable dependiente: *a)* dicotómica clasificando como apoyo a la redistribución solamente el valor 7 y como rechazo los valores de 1 a 5, y *b)* estimando un modelo de mínimos cuadrados con la variable original de LAPOP con valores entre 1 y 7.⁹

La gráfica 3 muestra los resultados del modelo 3 en términos de probabilidades predichas e indica que en promedio las experiencias de sobornos reducen la probabilidad de apoyar la redistribución en seis puntos porcentuales. Estos hallazgos corroboran la hipótesis 1 de acuerdo con la cual la experiencia de pagar sobornos para acceder a servicios sociales está negativamente relacionada con el apoyo a la redistribución.

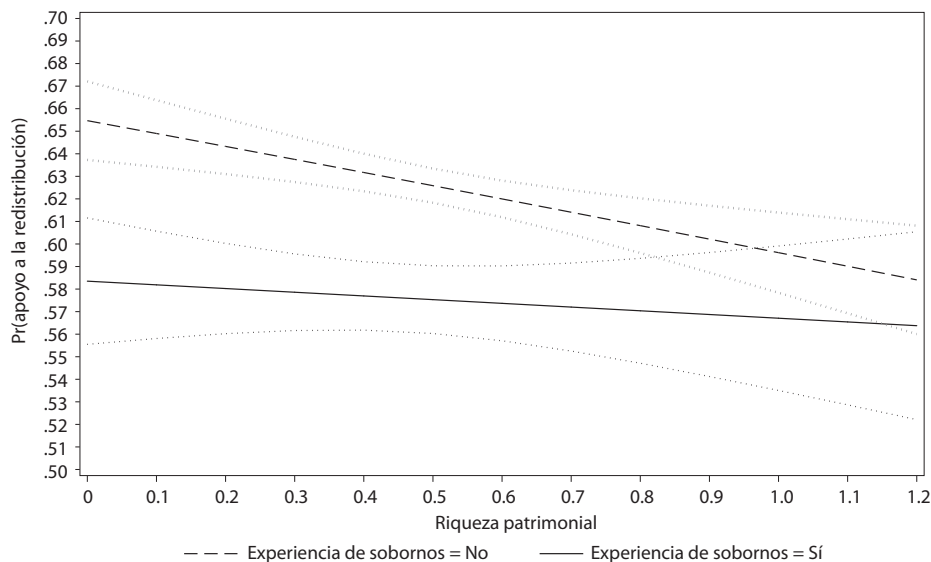
La mayoría de las variables de control se asocian con las preferencias redistributivas en la dirección esperada por las hipótesis alternativas. El apoyo a la redistribución está relacionado de manera negativa y estadísticamente significativa con la riqueza patrimonial y la ideología, mientras que el desempleo, la presencia de menores en el hogar y el nivel educativo se asocian significativamente a un mayor

⁹ Véanse los cuadros A1 y A2 del apéndice.

apoyo a la redistribución. Contra las expectativas de las hipótesis existentes, los indicadores de evaluación de la situación económica nacional y personal, así como el género (mujer) (Goossen, 2020) se asocian significativamente a una menor probabilidad de apoyar la redistribución.

La relación negativa entre las experiencias de sobornos en servicios sociales y el apoyo a la redistribución prueba una parte del argumento. También espero que esta relación sea más pronunciada para los usuarios de servicios públicos con ingresos bajos porque para ellos los sobornos son más perjudiciales que para los de ingresos medios y altos. Para poner a prueba esta segunda hipótesis, estimo los mismos modelos, pero incluyo un término de interacción entre las variables experiencia de sobornos y riqueza patrimonial. Esto permite determinar si el efecto de los sobornos es heterogéneo entre individuos con diferentes niveles de riqueza. La gráfica 4 presenta los resultados sustantivos de la interacción y confirma que la experiencia de pagar sobornos para acceder a servicios sociales tiene un efecto negativo y sustancialmente mayor para las personas más pobres, con una reducción de siete puntos porcentuales. A medida que la riqueza de los individuos aumenta, el efecto de los sobornos sobre el apoyo a la redistribución se hace más débil y para el segmento más rico las probabilidades de apoyar la redistribución entre quienes han pagado sobornos y quienes no lo han hecho son indistinguibles.

GRÁFICA 4. Experiencias de sobornos en servicios sociales, riqueza patrimonial y apoyo a la redistribución. Efectos marginales con ic de 90 por ciento



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. Se basa en la estimación del modelo A9 del cuadro A3 del apéndice.

PRUEBAS DE ROBUSTEZ

Desigualdad entre grupos

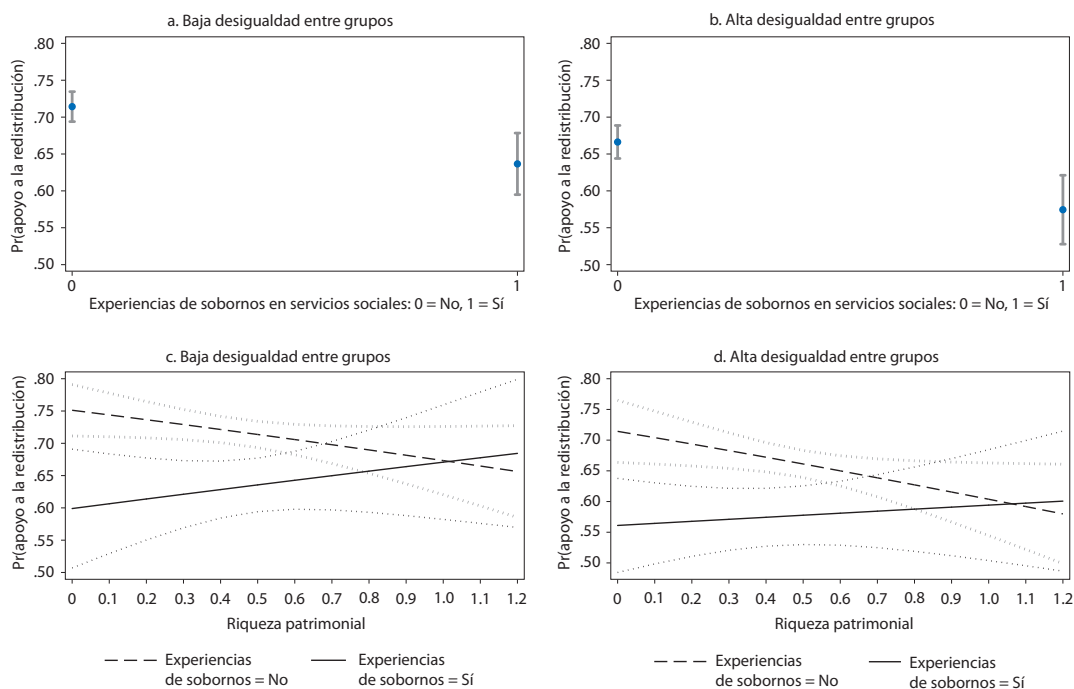
He argumentado que los ciudadanos que han debido pagar sobornos son menos proclives a apoyar la redistribución porque la corrupción mina sus expectativas respecto a la capacidad del Estado. Investigaciones recientes han mostrado que la demanda de redistribución es afectada por la estructura de las desigualdades sociales —étnicas, religiosas—, además de las económicas (Hansen y Jensen, 2017; Luttmer, 2001). Por ejemplo, Houle (2017) argumenta que el efecto de la desigualdad sobre la redistribución puede ser más débil en las democracias donde las personas pobres están divididas por líneas étnicas que donde están étnicamente unificadas. Por su parte, con diseños experimentales, Nettle y Saxe (2020) muestran que la demanda de redistribución es mayor cuando los grupos son más homogéneos socialmente. En América Latina, en las sociedades donde la desigualdad económica excluye de manera sistemática y desproporcionada a ciertos grupos sociales (Gandelman *et al.*, 2011), las expectativas respecto a la capacidad del gobierno para redistribuir y avanzar hacia una asignación más equitativa del ingreso son menores que donde las desigualdades económicas no se superponen con las divisiones sociales entre grupos (Morgan y Kelly, 2017). En consecuencia, deberíamos esperar que los efectos de los sobornos sobre el apoyo a la redistribución sean heterogéneos entre sociedades con diferentes niveles de desigualdad entre grupos. En países con alta desigualdad intergrupala, donde la desigualdad económica coincide con las desigualdades sociales, las experiencias de sobornos afectarían de forma limitada la demanda de redistribución porque los ciudadanos más pobres no esperan que el Estado redistribuya en su favor. Por el contrario, en las sociedades donde la desigualdad económica no se superpone con las divisiones sociales entre grupos, los sobornos deberían tener un impacto negativo mayor sobre las preferencias redistributivas porque los ciudadanos tienen mayores expectativas respecto a la capacidad del Estado para proveer beneficios sociales.

Exploro la plausibilidad de estas implicaciones, analizando el efecto de los sobornos sobre el apoyo a la redistribución en dos submuestras de encuestados según residan en países con baja o alta desigualdad entre grupos. Para construir las submuestras uso la media de la medida de desigualdad entre grupos elaborada por Morgan y Kelly (2017)¹⁰ y estimo los mismos modelos que en las pruebas previas.¹¹ La gráfica 5 presenta los efectos marginales de las experiencias de sobornos en servi-

¹⁰ Para calcular la desigualdad entre grupos, Morgan y Kelly (2017) asignan a los individuos dentro de cada grupo étnico la riqueza media del grupo y luego calculan un índice de Gini. Esto produce una medida que estima el nivel de desigualdad económica entre los grupos étnicos. La medida de desigualdad entre grupos es igual a cero cuando en un país todos los grupos étnicos tienen el mismo ingreso promedio y aumenta a medida que las diferencias en el ingreso promedio entre los grupos étnicos se amplían.

¹¹ Los resultados de los modelos estimados se reportan en el cuadro A4 del apéndice.

GRÁFICA 5. Efectos de experiencias de sobornos en servicios sociales y riqueza sobre el apoyo a la redistribución en submuestras según desigualdad entre grupos sociales. Efectos marginales con IC de 90 por ciento



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. Se basan en la estimación de los modelos A10, A11, A12 y A13 en el cuadro A4 del apéndice.

cios sociales sobre la probabilidad de apoyar la redistribución en cada submuestra. Las gráficas de los paneles a y b de la gráfica 5, basados en los modelos que evalúan la primera hipótesis, indican que el efecto de los sobornos sobre el apoyo a la redistribución es negativo y significativo en ambos tipos de sociedades. Sin embargo, la reducción del apoyo a la redistribución es mayor en la submuestra de países con baja desigualdad entre grupos que en la de países con alta desigualdad intergrupala. En los primeros, los sobornos reducen la probabilidad de apoyar la redistribución en ocho puntos porcentuales, mientras en los segundos, la reducción es apenas de cuatro puntos. Los paneles c y d de la misma gráfica evalúan la segunda hipótesis para las dos submuestras y sugieren que el efecto moderador de la riqueza sobre la relación entre los sobornos y el apoyo a la redistribución se observa en ambas submuestras y, como esperábamos, es más grande en países con baja desigualdad entre grupos que en países con alta desigualdad. En los países con baja desigualdad intergrupala (panel c), el efecto de los sobornos es más marcado entre las personas pobres y se reduce a medida que aumenta la riqueza. En cambio, en la submuestra de paí-

ses con más desigualdad entre grupos, donde las expectativas de redistribución son más bajas, el efecto moderador de la riqueza sobre la relación entre sobornos y redistribución es más atenuado.

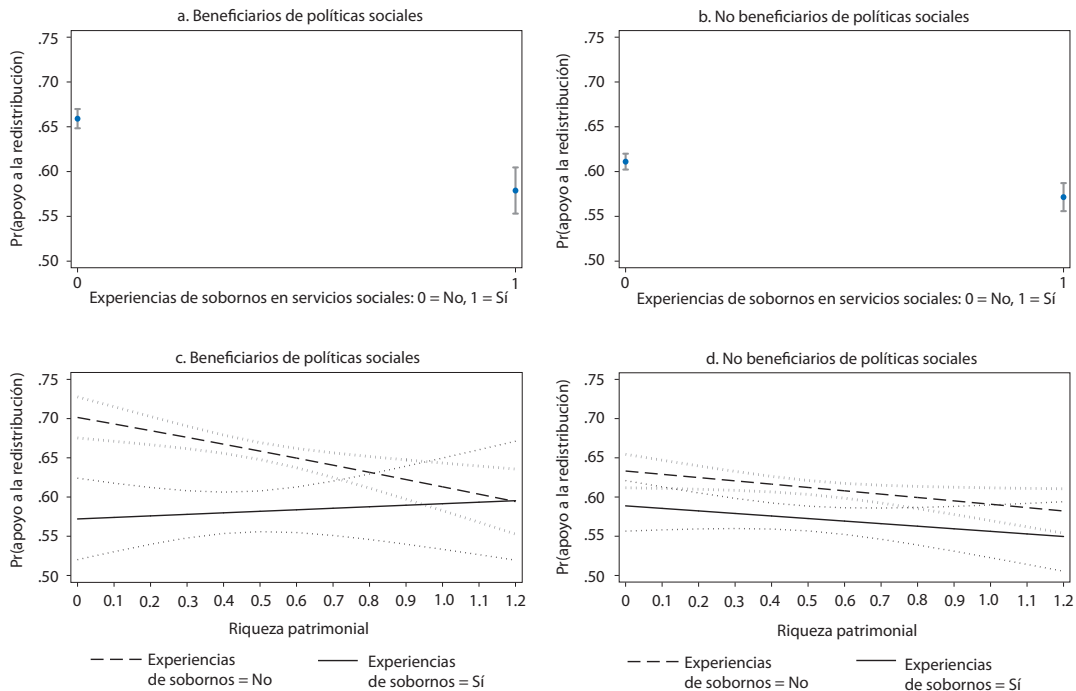
Beneficios de políticas sociales

En América Latina, hasta finales del siglo xx los Estados de bienestar fueron “estratificados”, caracterizados por sistemas de seguridad social generosos con los trabajadores del sector formal y por la exclusión de los trabajadores informales y rurales (Haggard y Kaufman, 2008). A inicios del siglo XXI, gobiernos latinoamericanos de distinto signo ideológico ampliaron la cobertura de los beneficios no contributivos en materia de pensiones y atención a la salud y de las transferencias para el combate a la pobreza, entre otros programas sociales (Garay, 2016; Huber y Stephens, 2012; Pribble, 2013). Sin embargo, los sistemas de bienestar continúan siendo restringidos. Según Holland (2018), este limitado acceso a beneficios sociales entre la población más pobre de América Latina da cuenta del bajo apoyo a la redistribución en la región. La exclusión de los ciudadanos más pobres de los beneficios de la política social conduce a su escepticismo respecto a la capacidad del Estado para la redistribución. Si consideramos los sobornos, estos deberían tener un efecto menor sobre las preferencias redistributivas entre quienes están excluidos de los beneficios de política social porque solo confirmarían sus creencias acerca de la incapacidad del Estado para proveer bienes. El efecto de los sobornos sobre el apoyo a la redistribución debería ser diferente para los ciudadanos que sí se benefician de las políticas sociales. En primer lugar, para los incluidos en los beneficios del estado de bienestar, el efecto negativo de las experiencias de sobornos debería ser particularmente fuerte y, segundo, el efecto condicionado por el nivel de riqueza debería ser todavía más fuerte que para los excluidos de los beneficios. Entre las personas que se benefician del limitado estado de bienestar y que no sufren experiencias de corrupción cuando usan los servicios, el apoyo a la redistribución debería ser máximo. En cambio, quienes al contactar con servicios sociales enfrentan solicitudes de sobornos, tienen una información que debería cambiar sus expectativas respecto a la capacidad estatal y reducir su apoyo a la redistribución.

Evalúo estas expectativas analizando el efecto de los sobornos sobre el apoyo a la redistribución en dos submuestras conformadas por beneficiarios y no beneficiarios de políticas sociales.¹² La gráfica 6 muestra el efecto de las experiencias de sobornos

¹²Clasifiqué a los beneficiarios y no beneficiarios tomando las respuestas a una serie de preguntas sobre los beneficios de política social recibidos (transferencias condicionadas, seguro de salud, pensión o subsidios). Codifiqué como 1 (beneficiario) al menos una respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas por estos beneficios (CCT1B, CCT1C, BOLCCT1A, BOLCCT1B, BOLCCT1C, WF1, PEN1, SAL1) y como 0 (no beneficiario) a quienes respondieron “no” a todas las preguntas.

GRÁFICA 6. Efectos de experiencias de sobornos en servicios sociales y riqueza sobre el apoyo a la redistribución en submuestras de beneficiarios y no beneficiarios de políticas sociales. Efectos marginales con IC de 90 por ciento



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. Se basan en la estimación de los modelos A14, A15, A16 y A17 en el cuadro A5 del apéndice.

sobre el apoyo a la redistribución para beneficiarios (a y c) y no beneficiarios (b y d).¹³ Los paneles a y b confirman las expectativas y muestran que la reducción del apoyo a la redistribución es mayor entre quienes reciben beneficios, con una disminución de 8 puntos porcentuales, que entre quienes no son beneficiarios, con una de 4 puntos. Los paneles c y d grafican el efecto condicionado de las experiencias de sobornos dependiendo del nivel de riqueza para las dos submuestras y confirman los hallazgos de las pruebas principales para la segunda hipótesis, así como la heterogeneidad en el efecto de los sobornos entre los ciudadanos que se benefician del estado de bienestar y los que no. En el panel c, el escenario supuestamente más propicio para el apoyo a la redistribución porque comprende a los beneficiarios de las políticas de bienestar, los usuarios pobres que reciben solicitudes de sobornos para acceder a servicios sociales experimentan una reducción del apoyo a la redistribución más marcada que los usuarios con niveles más altos de riqueza. Estos resultados apoyan el argumento de

¹³ Los resultados de los modelos estimados se reportan en el cuadro A5 del apéndice.

este trabajo sobre el impacto negativo de los sobornos sobre las preferencias redistributivas y los efectos más pronunciados de estas experiencias entre los más pobres inclusive en los contextos y situaciones más propicios para el apoyo a la redistribución.

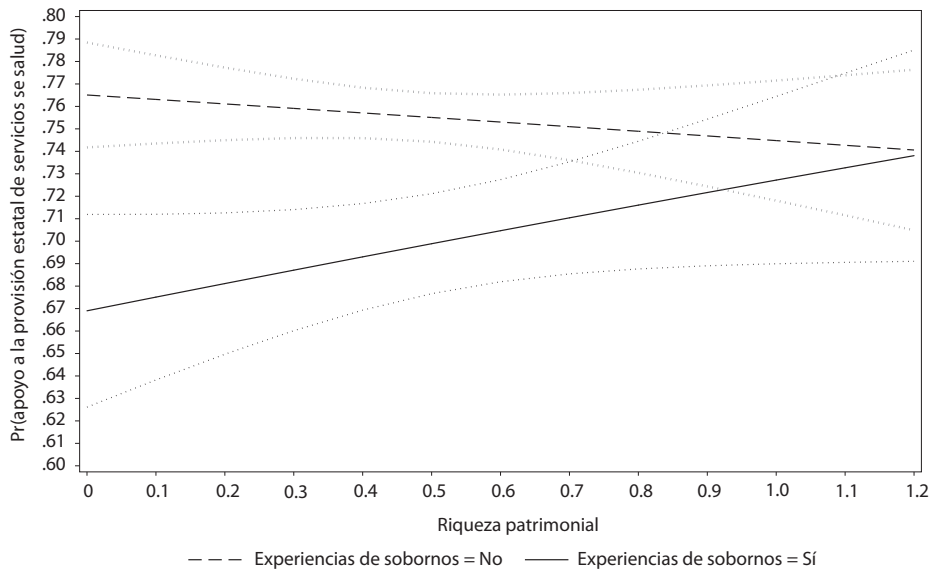
Los hallazgos también son robustos cuando se incluyen controles adicionales para la informalidad laboral, la identidad étnica y las experiencias de sobornos en otros servicios públicos no sociales, así como cuando se evalúa el efecto de los sobornos exclusivamente en servicios de salud o en las escuelas. Se puede esperar que el efecto de las experiencias de sobornos sobre el apoyo a la redistribución sea menor entre los trabajadores informales porque por una parte no contribuyen a financiar las políticas sociales y por otra están excluidos de los beneficios que predominantemente se basan en principios contributivos (Berens, 2015; Holland, 2018). Las minorías étnicas pueden apoyar más la redistribución porque se encuentran en una posición menos favorable que otras personas con el mismo nivel de ingreso (Morgan y Kelly, 2017). Por último, controlo por experiencias de soborno con funcionarios de otras áreas del Estado, no sociales, para descartar que el efecto sobre las preferencias redistributivas se explique por la extensión de la corrupción pública. Los resultados de estas pruebas de robustez se reportan en los cuadros A6, A7 y A8 del apéndice.

EXPLORANDO EL MECANISMO

Los resultados de los modelos especificados hasta ahora muestran que las personas que han debido pagar sobornos para acceder a servicios sociales son menos proclives a apoyar la intervención del Estado para redistribuir el ingreso que quienes no han tenido este tipo de experiencias. De acuerdo con el argumento propuesto, las experiencias de sobornos reducen el apoyo a la redistribución porque afectan las expectativas respecto a la capacidad del Estado para proveer servicios sociales de manera imparcial y confiable (Mares, 2005). Si para acceder a los servicios de las políticas redistributivas deben pagarse sobornos porque el Estado es ineficiente y corrupto, los costos de acceso a estas políticas sociales pueden ser mayores que los beneficios (Kaufmann *et al.*, 2008). En consecuencia, podemos esperar que las experiencias de sobornos reduzcan la demanda de provisión estatal de servicios sociales y que este efecto sea más pronunciado entre las personas para quienes, como argumenté previamente, es más costoso pagar los sobornos. Exploro el mecanismo propuesto usando los datos de la ronda del año 2012 de las encuestas de LAPOP, que incorporó una serie de preguntas en torno al rol del Estado en el sector social y en la economía.¹⁴ La pregunta de interés mide el apoyo de los ciudadanos a la intervención del Estado en la provisión de servicios de salud: ROS6. “El Estado (país), más que el sector privado, debería ser el principal responsable de proveer los servicios

¹⁴ Agradezco la sugerencia de implementar esta estrategia y de usar esta fuente a uno de los revisores anónimos.

GRÁFICA 7. Experiencias de sobornos en servicios sociales, riqueza patrimonial y apoyo a la provisión estatal de servicios de salud. Efectos marginales con IC de 90 por ciento



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2012, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. Se basa en la estimación del modelo A32 en el cuadro A9 del apéndice.

de salud. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”¹⁵ Estimo un modelo de regresión logística que tiene como variable dependiente las respuestas dicotomizadas a esta pregunta acerca del apoyo a la provisión estatal de los servicios de salud y que incluye un término de interacción entre las variables experiencia de sobornos y riqueza patrimonial. Los modelos usan las mismas muestras emparejadas utilizadas y los mismos controles que las regresiones previas.¹⁶ La gráfica 7 expone los resultados y muestra que los ciudadanos que debieron pagar sobornos para acceder a servicios sociales tienen una probabilidad significativamente menor de apoyar la provisión estatal de servicios de salud que quienes no han pagado sobornos. Este efecto negativo es más marcado entre los usuarios pobres, con una reducción de 10 puntos porcentuales, mientras a medida que aumenta la riqueza el efecto negativo de los sobornos se reduce hasta hacerse estadísticamente no significativo entre los usuarios más ricos.

¹⁵ Los servicios públicos de salud junto con los de educación constituyen las políticas más redistributivas en América Latina (Lustig *et al.*, 2013).


¹⁶ Los resultados completos de los modelos se reportan en el cuadro A8 del apéndice.

CONCLUSIONES

En los países en desarrollo, millones de personas pagan sobornos para poder obtener servicios del Estado cuyo acceso está formalmente garantizado (Rose y Peiffer, 2015). La literatura acerca de los efectos de retroalimentación de las políticas sociales ha mostrado que su diseño e implementación afectan las experiencias de los ciudadanos en la interacción con las burocracias públicas y moldean las actitudes hacia el Estado en general y hacia la intervención del Estado para la redistribución del ingreso (Ingram y Schneider, 1993; Kumlin, 2004; Pierson, 1993; Soss, 1999). Los sobornos no son atributos del diseño de las políticas, pero constituyen una parte importante de las experiencias de los ciudadanos en su interacción con la burocracia del Estado ignorada por la investigación sobre efectos de retroalimentación.

El artículo argumenta que las experiencias de los ciudadanos en su interacción con los servicios sociales moldean sus expectativas acerca de la capacidad del Estado para redistribuir. Los sobornos afectan la evaluación que los ciudadanos hacen de la capacidad estatal y conducen a la reducción del apoyo a la intervención del Estado en la redistribución del ingreso. El análisis de encuestas en dieciocho países de América Latina muestra que los ciudadanos que han debido pagar sobornos para acceder a servicios sociales públicos son menos proclives a apoyar la redistribución y que este efecto es más marcado entre los usuarios pobres. Además, el cobro de sobornos para acceder a servicios públicos de salud induce a los ciudadanos a oponerse a la provisión pública de estos servicios.

El artículo contribuye a la investigación sobre la formación de actitudes políticas respecto a la redistribución del ingreso en países en vías de desarrollo. Ofrece el primer análisis de la relación entre las experiencias de sobornos y las preferencias redistributivas. Los hallazgos sobre el impacto negativo de los sobornos sobre la demanda de redistribución aportan a las teorías de los efectos de retroalimentación positivos y negativos de las políticas sociales entre sus beneficiarios y ofrecen evidencia en torno a las consecuencias de las experiencias de interacción de los ciudadanos con los servicios del Estado para la formación de actitudes políticas.

Sería deseable que futuros estudios sobre la relación entre las experiencias de sobornos y preferencias redistributivas avanzaran en aspectos no considerados en este artículo. En primer lugar, sería recomendable hacer una evaluación empírica de la hipótesis en un conjunto de casos que incluya países de otras regiones para ampliar la variabilidad en las preferencias redistributivas y en la extensión de los sobornos. Segundo, sería deseable poner a prueba la hipótesis propuesta con un diseño experimental que pudiera evaluar de manera más rigurosa el efecto causal. También se podrían evaluar los efectos de los escándalos de corrupción sobre las preferencias redistributivas y los efectos de estos escándalos dependiendo de la orientación ideológica del gobierno implicado en los mismos. 

REFERENCIAS

- Alesina, A. y P. Giuliano (2011), “Preferences for Redistribution”, en A. Bisin, J. Benhabib, y M.O. Jackson (eds.), *Handbook of Social Economics*, Vol. 1A, Ámsterdam, Elsevier, pp. 93-131.
- Almeida-Santos, P.S., A. Carpes Dani, C.B. Dal Magro, J. Matias-Pereira y V.C. da Silva Zonatto (2018), “Efeitos da Qualidade da Governança Pública no Sentimento de Confiança da População em Países da América Latina”, *Administracao Publica e Gestao Social*, 10(4), pp. 228-238, doi:10.21118/apgs.v10i4.1794.
- Alvaredo, F. y L. Gasparini (2015), “Recent Trends in Inequality and Poverty in Developing Countries”, en A.B. Atkinson y F. Bourguignon (eds.), *Handbook of Income Distribution*, Ámsterdam, Elsevier.
- Anderson, C.J. y J. Pontusson (2007), “Workers, Worries and Welfare States: Social Protection and Job Insecurity in 15 OECD Countries”, *European Journal of Political Research*, 46(2), pp. 211-235.
- Anderson, C.J. y Y.V. Tverdova (2003), “Corruption, Political Allegiances, and Attitudes Toward Government in Contemporary Democracies”, *American Journal of Political Science*, 47(1), pp. 91-109.
- Baker, A. y K.F. Greene (2011), “The Latin American Left’s Mandate: Free-Market Policies and Issue Voting in New Democracies”, *World Politics*, 63(1), pp. 43-77.
- Baldwin, K. y J.D. Huber (2010), “Economic versus Cultural Differences: Forms of Ethnic Diversity and Public Goods Provision”, *American Political Science Review*, 104(4), pp. 644-662.
- Béland, D. y E. Schlager (2019), “Varieties of Policy Feedback Research: Looking Backward, Moving Forward”, *Policy Studies Journal*, 47(2), pp. 184-205, DOI: <https://doi.org/10.1111/psj.12340>.
- Bendz, A. (2017), “Empowering the People: Public Responses to Welfare Policy Change”, *Social Policy & Administration*, 51(1), pp. 1-19, DOI: <https://doi.org/10.1111/spol.12148>.
- Berens, S. (2015), “Preferences on Redistribution in Fragmented Labor Markets in Latin America and the Caribbean”, *Journal of Politics in Latin America*, 7(3), pp. 117-156, DOI: 10.1177/1866802X1500700304.
- Berens, S. y A.V. Schiller (2017), “Taxing Higher Incomes: What Makes the High-Income Earners Consent to More Progressive Taxation in Latin America?”, *Political Behavior*, 39(3), pp. 703-729.
- Berens, S. y A. Kemmerling (2019), “Labor Divides, Informality, and Regulation: The Public Opinion on Labor Law in Latin America”, *Journal of Politics in Latin America*, 11(1), pp. 23-48, DOI:10.1177/1866802X19843362.
- Besley, T. y T. Persson (2009), “The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics”, *American Economic Review*, 99(4), pp. 1218-1244, DOI: 10.1257/aer.99.4.1218.
- Blekesaune, M. (2013), “Economic Strain and Public Support for Redistribution: A Comparative Analysis of 28 European Countries”, *Journal of Social Policy*, 42(1), pp. 57-72, DOI: 10.1017/S0047279412000748.
- Bohorquez, E. y D. Devrim (2012), *Cracking the Myth of Petty Bribery*, Barcelona, CIDOB, disponible en: https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionales/n1_51/cracking_the_myth_of_petty_bribery [fecha de consulta: 20 de marzo, 2020].
- Brambor, T., A. Goenaga, J. Lindvall y J. Teorell (2020), “The Lay of the Land: Informa-

- tion Capacity and the Modern State”, *Comparative Political Studies*, 53(2), pp. 175-213, DOI: 10.1177/0010414019843432.
- Bratton, M. y E. Gyimah-Boadi (2016), *Do Trustworthy Institutions Matter for Development? Corruption, Trust, and Government Performance in Africa*, Afrobarometer Dispatch, AD112.
- Brautigam, D.A., O.-H. Fjeldstad y M. Moore (2008), *Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Bruch, S.K., M.M. Ferree y J. Soss (2010), “From Policy to Polity: Democracy, Paternalism, and the Incorporation of Disadvantaged Citizens”, *American Sociological Review*, 75(2), pp. 205-226.
- Bugge, H. (2020), “Welfare Conditionality and Democratic Citizenship in Norway”, *Journal of European Social Policy*, DOI: 10.1177/0958928720974179.
- Bullock, J. (2020), “Education and Attitudes Toward Redistribution in the United States”, *British Journal of Political Science*, DOI: 10.1017/S0007123419000504.
- Busemeyer, M. (2013), “Education Funding and Individual Preferences for Redistribution”, *European Sociological Review*, 29(6), pp. 1122-1133, DOI: 10.1093/esr/jcs085.
- Busemeyer, M.R. y A. Goerres (2020), “Policy Feedback in the Local Context: Analysing Fairness Perceptions of Public Childcare Fees in a German Town”, *Journal of Public Policy*, 40(3), pp. 513-533, DOI: 10.1017/S0143814X18000491.
- Caillier, J. (2018), “The Priming Effect of Corruption and Bureaucracy Bashing on Citizens’ Perceptions of an Agency’s Performance”, *Public Performance & Management Review*, pp. 1-23, DOI: 10.1080/15309576.2018.1431138.
- Calzada, I. y E. del Pino (2008), “Perceived Efficacy and Citizens’ Attitudes Toward Welfare State Reform”, *International Review of Administrative Sciences*, 74(4), pp. 555-574, DOI: 10.1177/0020852308098468.
- Campbell, A.L. (2012), “Policy Makes Mass Politics”, *Annual Review of Political Science*, 15, pp. 333-351.
- Camussi, S., A.L. Mancini y P. Tommasino (2018), “Does Trust Influence Social Expenditures? Evidence from Local Governments”, *Kyklos*, 71(1), pp. 59-85.
- Centeno, M.A., A. Kohli y D.J. Yashar (2017), *States in the Developing World*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Chang, E. y Y.-h. Chu (2006), “Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies?” *Journal of Politics*, 68(2), pp. 259-271.
- Chang, E.C. y C. Yun-Han (2006), “Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies?” *Journal of Politics*, 68(2), pp. 259-271.
- Charron, N. (2016), “Do Corruption Measures Have a Perception Problem? Assessing the Relationship between Experiences and Perceptions of Corruption among Citizens and Experts”, *European Political Science Review*, 8(1), pp. 147-171, DOI: 10.1017/s1755773914000447.
- Christensen, T. y P. Læg Reid (2005), “Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography”, *Public Performance & Management Review*, 28(4), pp. 487-511.
- Corman, H., D. Dave y N.E. Reichman (2017), “Effects of Welfare Reform on Womens’ Voting Participation”, *Economic Inquiry*, 55(3), pp. 1430-1451, DOI: <https://doi.org/10.1111/ecin.12433>.
- Cramer, B.D. y R.R. Kaufman (2011), “Views of Economic Inequality in Latin America”, *Comparative Political Studies*, 44(9), pp. 1206-1237.
- Cusack, T., T. Iversen y P. Rehm (2006), “Risks at Work: The Demand and Supply Sides

- of Government Redistribution”, *Oxford Review of Economic Policy*, 22(3), pp. 365-389.
- D’Arcy, M. y M. Nistotskaya (2016), “State First, Then Democracy: Using Cadastral Records to Explain Governmental Performance in Public Goods Provision”, *Governance*, 30, DOI: 10.1111/gove.12206.
- DeHart-Davis, L. (2007), “The Unbureaucratic Personality”, *Public Administration Review*, 67(5), pp. 892-903, DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00776.x>.
- De La O, A.L. y J.A. Rodden (2008), “Does Religion Distract the Poor?: Income and Issue Voting Around the World”, *Comparative Political Studies*, 41(4-5), pp. 437-476, DOI: 10.1177/0010414007313114.
- Deininger, K. y P. Mpuga (2005), “Does Greater Accountability Improve the Quality of Public Service Delivery? Evidence from Uganda”, *World Development*, 33(1), pp. 171-191, DOI: 10.1016/j.worlddev.2004.09.002.
- Dion, M. y V. Birchfield (2010), “Economic Development, Income Inequality, and Preferences for Redistribution1”, *International Studies Quarterly*, 54(2), pp. 315-334, DOI: 10.1111/j.1468-2478.2010.00589.x.
- Druckman, J., J. Rothschild y E. Sharrow (2018), “Gender Policy Feedback: Perceptions of Sex Equity, Title IX, and Political Mobilization among College Athletes”, *Political Research Quarterly*, 71(3), pp. 1-12.
- Egan, P.J. y M. Mullin (2012), “Turning Personal Experience into Political Attitudes: The Effect of Local Weather on Americans’ Perceptions about Global Warming”, *The Journal of Politics*, 74(3), pp. 796-809, DOI: 10.1017/s0022381612000448.
- Emran, M.S., A. Islam y F. Shilpi (2020), “Distributional Effects of Corruption When Enforcement is Biased: Theory and Evidence from Bribery in Schools in Bangladesh”, *Economica*, 87(384), pp. 1-31, DOI: 10.1111/ecca.12337.
- Falkingham, J., B. Akkazieva y A. Baschieri (2010), “Trends in Out-of-pocket Payments for Health care in Kyrgyzstan, 2001-2007”, *Health Policy and Planning*, 25(5), pp. 427-436, DOI: 10.1093/heapol/czq011.
- Fernández, J.J. y A.M. Jaime-Castillo (2012), “Positive or Negative Policy Feedbacks? Explaining Popular Attitudes Towards Pragmatic Pension Policy Reforms”, *European Sociological Review*, 29(4), pp. 803-815, DOI: 10.1093/esr/jcs059.
- Fried, B.J., P. Lagunes y A. Venkataramani (2010), “Corruption and Inequality at the Crossroad: A Multimethod Study of Bribery and Discrimination in Latin America”, *Latin American Research Review*, 45(1), pp. 76-97.
- Gandelman, N., H. Ñopo y L. Ripani (2011), “Traditional Excluding Forces: A Review of the Quantitative Literature on the Economic Situation of Indigenous Peoples, Afro-descendants, and People Living with Disability”, *Latin American Politics and Society*, 53(4), pp. 147-179, DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2011.00137.x>.
- Garay, C. (2016), *Social Policy Expansion in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Gasparini, L., G. Cruces, L. Tornarolli y D. Mejía (2011), “Recent Trends in Income Inequality in Latin America [with Comments]”, *Economia-Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association*, 11(2), pp. 147-201.
- Gaviria, A., C. Graham y L.H. Braidó (2007), “Social Mobility and Preferences for Redistribution in Latin America”, *Economia-Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association*, 8(1), pp. 55-96, DOI: 10.1353/eco.2008.0003.
- Gingrich, J. y B. Ansell (2012), “Preferences in Context: Micro Preferences, Macro Con-

- texts, and the Demand for Social Policy”, *Comparative Political Studies*, 45(12), pp. 1624-1654, DOI: 10.1177/0010414012463904.
- Goossen, M. (2020), “The Gender Gap in Welfare State Attitudes in Europe: The Role of Unpaid Labour and Family Policy”, *Journal of European Social Policy*, 30(4), pp. 452-466, DOI: 10.1177/0958928719899337.
- Habibov, N. (2016), “Effect of Corruption on Healthcare Satisfaction in Post-soviet Nations: A Cross-country Instrumental Variable Analysis of Twelve Countries”, *Social Science & Medicine*, 152, pp. 119-124, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.044>.
- Habibov, N., A. Cheung y A. Auchynnikava (2018), “Does Institutional Trust Increase Willingness to Pay More Taxes to Support the Welfare State?” *Sociological Spectrum*, 38(1), pp. 1-18.
- Habibov, N., L. Fan y A. Auchynnikava (2019), “The Effects of Corruption on Satisfaction with Local and National Governments. Does Corruption ‘Grease the Wheels?’” *Euro-Asia Studies*, 71(5), pp. 736-752, DOI: 10.1080/09668136.2018.1562044.
- Haggard, S. y R.R. Kaufman (2008), *Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe*, Princeton, Princeton University Press.
- Haggard, S., R.R. Kaufman y J.D. Long (2013), “Income, Occupation, and Preferences for Redistribution in the Developing World”, *Studies in Comparative International Development*, 48(2), pp. 113-140, DOI: 10.1007/s12116-013-9129-8.
- Hansen, K.K. y C. Jensen (2017), “Politized Coalitions: Social Affinity and the Politics of Redistribution”, *Comparative European Politics*, 15(2), pp. 204-219, DOI: 10.1057/cep.2015.13.
- Hazlett, C. y M. Mildenerger (2020), “Wildfire Exposure Increases Pro-Environment Voting within Democratic but Not Republican Areas”, *American Political Science Review*, 114(4), pp. 1359-1365, DOI: 10.1017/S0003055420000441.
- Hetherington, M.J. (2005), *Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism*, Princeton, Princeton University Press.
- Hicks, A. y D.H. Swank (1984), “Governmental Redistribution in Rich Capitalist Democracies”, *Policy Studies Journal*, 13(2), pp. 265-287.
- Ho, D.E., K. Imai, G. King y E.A. Stuart (2007), “Matching as Nonparametric Preprocessing for Reducing Model Dependence in Parametric Causal Inference”, *Political Analysis*, 15(3), pp. 199-236, DOI: 10.1093/pan/impl013.
- Holland, A.C. (2018), “Diminished Expectations: Redistributive Preferences in Truncated Welfare States”, *World Politics*, 70(4), pp. 555-594.
- Houle, C. (2017), “Inequality, Ethnic Diversity, and Redistribution”, *The Journal of Economic Inequality*, 15(1), pp. 1-23, DOI: 10.1007/s10888-016-9340-8.
- Huber, E. y J.D. Stephens (2012), *Democracy and the Left. Social Policy and Inequality in Latin America*, Chicago, University of Chicago Press.
- Hunt, J. (2004), “Trust and Bribery: The Role of Quid Pro Quo and the Link with Crime”, documento de trabajo w10510, NBER.
- Hunt, J., Y. Greenberg, F. Grimard, J. Herrera, M. Baanante, D. Parent, K. Terrell y J. Svejnar (2006), “Who Loses from Bribery and Who Are Its Beneficiaries”.
- Hunt, J. y S. Laszlo (2012), “Is Bribery Really Regressive? Bribery’s Costs, Benefits, and Mechanisms”, *World Development*, 40(2), pp. 355-372, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.06.001>.
- Hunter, W. y R. Brill (2016), “‘Documents, Please’: Advances in Social Protection and Bir-

- th Certification in the Developing World”, *World Politics*, 68(2), pp. 191-228, DOI: 10.1017/S0043887115000465.
- Ingram, H.M. y A. Schneider (1993), “Constructing Citizenship: The Subtle Messages of Policy Design”, en H.M. Ingram y S.R. Smith (eds.), *Public Policy for Democracy*, Washington, D.C., Brookings Institution, pp. 68-98.
- Inoguchi, T. (2002), “Broadening the Basis of Social Capital in Japan”, en R. Putnam (ed.), *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*, Oxford, Oxford University Press, pp. 359-392
- Iversen, T. y D. Soskice (2001), “An Asset Theory of Social Policy Preferences”, *American Political Science Review*, 95(4), pp. 875-895.
- Jacobs, A.M. y J.S. Matthews (2017), “Policy Attitudes in Institutional Context: Rules, Uncertainty, and the Mass Politics of Public Investment”, *American Journal of Political Science*, 61(1), pp. 194-207.
- Jain, A.K. (1998), “Models of Corruption”, en A.K. Jain (ed.), *Economics of Corruption*, Boston, Kluwer, pp. 13-34.
- Jordan, J. (2010), “Institutional Feedback and Support for the Welfare State: The Case of National Health Care”, *Comparative Political Studies*, 43, pp. 862-885.
- Justesen, M.K. y C. Bjørnskov (2014), “Exploiting the Poor: Bureaucratic Corruption and Poverty in Africa”, *World Development*, 58, pp. 106-115, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.002>.
- Kaufman, R.R. (2009), “The Political Effects of Inequality in Latin America: Some Inconvenient Facts”, *Comparative Politics*, 41(3), pp. 359-379.
- Kaufmann, D. (1997), “Corruption: The Facts”, *Foreign Policy*, 107(1), pp. 114-131.
- Kaufmann, D., J.A. Montoriol-Garriga y F. Recanatini (2008), “How Does Bribery Affect Public Service Delivery? Micro-Evidence From Service Users And Public Officials In Peru”, World Bank Policy Research Working Paper 4492.
- Kitschelt, H. y P. Rehm (2014), “Occupations as a Site of Political Preference Formation”, *Comparative Political Studies*, 47(12), pp. 1670-1706.
- Klitgaard, R. (1988), *Controlling Corruption*, Berkeley, University of California Press.
- Korosteleva, J., T. Mickiewicz y P. Stepien-Baig (2020), “It Takes Two to Tango: Complementarity of Bonding and Bridging Trust in Alleviating Corruption in Cities”, *Regional Studies*, 12, DOI: 10.1080/00343404.2019.1652894.
- Korpi, W. y J. Palme (1998), “The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality”, *American Sociological Review*, 63(5), pp. 661-687.
- Korpi, W. y J. Palme (2003), “New Politics and Class Politics in the Context of Austerity and Globalization: Welfare State Regress in 18 Countries, 1975-95”, *American Political Science Review*, 97(3), pp. 425-446.
- Kumlin, S. (2004), *The Personal and the Political: How Personal Welfare State Experiences Affect Political Trust and Ideology*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- Kumlin, S. y B. Rothstein (2005), “Making and Breaking Social Capital: The Impact of Welfare-state Institutions”, *Comparative Political Studies*, 39(4), pp. 339-365.
- Kwon, O.-J. (2011), “The Logic of Social Policy Expansion in a Neoliberal Context: Health Insurance Reform in Korea after the 1997 Economic Crisis”, *Theory and Society*, 40(645), DOI: 10.1007/s11186-011-9155-3.
- Langseth, P. y B. Michael (1998), “Are Bribe Payments in Tanzania ‘Grease’ or ‘Grit’? *Crime, Law and Social Change*, 29(2), pp. 197-208, DOI: 10.1023/A:1008305020091.

- Larsen, C.A. (2008), “The Institutional Logic of Welfare Attitudes: How Welfare Regimes Influence Public Support”, *Comparative Political Studies*, 41(2), pp. 145-168, DOI: 10.1177/0010414006295234.
- Larsen, E.G. (2020), “Personal Politics? Healthcare Policies, Personal Experiences and Government Attitudes”, *Journal of European Social Policy*, 30(4), pp. 467-479, DOI: 10.1177/0958928720904319.
- Lepisto, E. y E. Kazimzade (2008), “Coercion or Compulsion? Rationales Behind Informal Payments for Education in Azerbaijan”, *European Education*, 40(4), pp. 70-92.
- Lerman, A.E. y K.T. McCabe (2017), “Personal Experience and Public Opinion: A Theory and Test of Conditional Policy Feedback”, *Journal of Politics*, 79(2), pp. 624-641, DOI: 10.1086/689286.
- Lieberman, E.S. (2003), *Race and Regionalism in the Politics of Taxation in Brazil and South Africa*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lipsky, M. (2010), *Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Service*, Nueva York, Russell Sage Foundation.
- Liu, T. y M. Sun (2012), “Informal Payments in Developing Countries’ Public Health Sectors”, *Pacific Economic Review*, 17(4), pp. 514-524, DOI: 10.1111/j.1468-0106.2012.00597.x.
- López-Calva, L.F. y N. Lustig (2010), *Declining Inequality in Latin America. A Decade of Progress?* Washington, D.C., Brookings Institution Press.
- Lustig, N., C. Pessino y J. Scott (2013), “The Impact of Taxes and Social Spending on Inequality and Poverty in Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico, Peru and Uruguay: An Overview”, *Public Finance Review*, 42(3), DOI: 10.1177/1091142113506931.
- Luttmer, E.F.P. (2001), “Group Loyalty and the Taste for Redistribution”, *Journal of Political Economy*, 109(3), pp. 500-528, DOI: 10.1086/321019.
- Mares, I. (2005), “Social Protection Around the World: External Insecurity, State Capacity, and Domestic Political Cleavages”, *Comparative Political Studies*, 38(6), pp. 623-651, DOI: 10.1177/0010414004274403.
- Margalit, Y. (2013), “Explaining Social Policy Preferences: Evidence from the Great Recession”, *American Political Science Review*, 107(1), DOI: 10.1017/S0003055412000603.
- Martin, A., G. Mikołajczak y R. Orr (2020), “Does Process Matter? Experimental Evidence on the Effect of Procedural Fairness on Citizens’ Evaluations of Policy Outcomes”, *International Political Science Review*, DOI: 10.1177/0192512120908874.
- Mbate, M. (2018), “Who Bears the Burden of Bribery? Evidence from Public Service Delivery in Kenya”, *Development Policy Review*, 36(S1), pp. O321-O340, DOI: <https://doi.org/10.1111/dpr.12311>.
- Meer, T. y A. Hakhverdian (2017), “Political Trust as the Evaluation of Process and Performance: A Cross-National Study of 42 European Countries”, *Political Studies*, 65(1), pp. 81-102.
- Meltzer, A.H. y S.F. Richard (1981a), “A Rational Theory of the Size of Government”, *Journal of Political Economy*, 89(5), pp. 914-927.
- Meltzer, A. y S. Richard (1981b), “A Rational Theory of the Government Size”, *Journal of Political Economy*, 89(5), pp. 914-927, DOI: 10.1086/261013.
- Mettler, S. y J. Soss (2004), “The Consequences of Public Policy for Democratic Citizenship: Bridging Policy Studies and Mass Politics”, *Perspectives on Politics*, 2(1), pp. 55-73.
- Miller, W.L., Å.B. Grodeland y T.Y. Koshechkina (2000), “If You Pay, We’ll Operate Immediately”, *Journal of Medical Ethics*, 26(5), pp. 305-311.

- Mocan, N. (2008), "What Determines Corruption? International Evidence from Microdata", *Economic Inquiry*, 46(4), pp. 493-510, DOI: 10.1111/j.1465-7295.20.
- Moene, K.O. y M. Wallerstein (2001), "Inequality, Social Insurance, and Redistribution", *American Political Science Review*, 95(4), pp. 859-874.
- Morgan, J. y N.J. Kelly (2017), "Social Patterns of Inequality, Partisan Competition, and Latin American Support for Redistribution", *Journal of Politics*, 71(1), pp. 193-209.
- Morris, S. D. y J.L. Klesner (2010), "Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico", *Comparative Political Studies*, 43(10), pp. 1258-1285.
- Nettle, D. y R. Saxe (2020), "Preferences for Redistribution are Sensitive to Perceived Luck, Social Homogeneity, War and Scarcity", *Cognition*, 198, 104234, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104234>.
- Newman, B.J. (2014), "My Poor Friend: Financial Distress in One's Social Network, the Perceived Power of the Rich, and Support for Redistribution", *Journal of Politics*, 76(1), pp. 126-138.
- Nye, J.S. (1967), "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis", *American Political Science Review*, 61(2), pp. 417-427, DOI: 10.2307/1953254.
- Peiffer, C. y R. Rose (2018), "Why Are the Poor More Vulnerable to Bribery in Africa? The Institutional Effects of Services", *The Journal of Development Studies*, 54(1), pp. 18-29, DOI: 10.1080/00220388.2016.1257121.
- Philp, M. (2015), "The Definition of Political Corruption", en P.M. Heywood (ed.), *Routledge Handbook of Political Corruption*, Abington, Routledge, pp. 17-29.
- Pierson, P. (1993), "When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change", *World Politics*, 45(4), pp. 595-618.
- Pierson, P. (1994), *Dismantling the Welfare State?: Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Pierson, P. (1996), "The New Politics of the Welfare State", *World Politics*, 48(2), pp. 143-179.
- Pribble, J. (2013), *Welfare and Party Politics in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Pring, C. y J. Vrushi (2019), *Global Corruption Barometer. Latin America & the Caribbean. Citizen's Views and Experiences of Corruption*, Transparency International.
- Rehm, P. (2009), "Risks and Redistribution: An Individual-Level Analysis", *Comparative Political Studies*, 42(7), pp. 855-881.
- Riesco, M. y S.M. Draibe (2007), *Latin America: A New Developmental Welfare State Model in the Making*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- Robinson, A.L. y B. Seim (2018), "Who is Targeted in Corruption? Disentangling the Effects of Wealth and Power on Exposure to Bribery", *Quarterly Journal of Political Science*, 13(3), pp. 313-331, DOI: 10.1561/100.00017067.
- Rose-Ackerman, S. (2010), "The Law and Economics of Bribery and Extortion", *Annual Review of Law and Social Science*, 6, pp. 217-238.
- Rose, R. y C. Peiffer (2013), *Contact Comes First: A Two-Step Model of Paying Bribes*, University of Strathclyde Studies in Public Policy 508.
- Rose, R. y C. Peiffer (2015), *Paying Bribes for Public Services. A Global Guide to Grass-Roots Corruption*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- Rothstein, B., M. Samanni y J. Teorell (2012), "Explaining the Welfare State: Power Resources vs. the Quality of Government", *European Political Science Review*, 4(1), pp. 1-28, DOI: 10.1017/S1755773911000051.

- Rothstein, B. y D. Stolle (2003), "Social Capital, Impartiality and the Welfare State: An Institutional Approach", en M. Hooghe y D. Stolle (eds.), *Generating Social Capital*, Nueva York, Palgrave, pp. 191-209.
- Ruan, J. (2019), "'Bribery with Chinese Characteristics' and the Use of Guanxi to Obtain Admission to Prestigious Secondary Schools in Urban China", *Critical Asian Studies*, 51(1), pp. 120-130, DOI: 10.1080/14672715.2018.1548906.
- Rueda, D. y D. Stegmueller (2016), "The Externalities of Inequality: Fear of Crime and Preferences for Redistribution in Western Europe", *American Journal of Political Science*, 60(2), pp. 472-489, DOI: <https://doi.org/10.1111/ajps.12212>.
- Ruhl, J.M. (2011), "Political Corruption in Central America: Assessment and Explanation", *Latin American Politics and Society*, 53(1), pp. 33-58.
- Sabet, D.M. (2013), "Corruption or Insecurity? Understanding Dissatisfaction with Mexico's Police", *Latin American Politics and Society*, 55(1), pp. 22-45, DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2012.00182.x>.
- Sachweh, P. (2018), "Conditional Solidarity: Social Class, Experiences of the Economic Crisis, and Welfare Attitudes in Europe", *Social Indicators Research*, 139(1), pp. 47-76.
- Salazar Méndez, Y. y F. Domingues Waltenberg (2018), "Desigualdade de Renda e Demanda por Redistribuição Caminham Juntas na América Latina no Período 1997-2015", *DADOS – Revista de Ciências Sociais*, 61(4), pp. 341-384.
- Scheve, K. y D. Stasavage (2006), "Religion and Preferences for Social Insurance", *Quarterly Journal of Political Science*, DOI: 10.1561/100.00005052.
- Schneider, A.L. y H.M. Ingram (1993), "Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy", *American Political Science Review*, 87(2), pp. 334-347, DOI: 10.2307/2939044.
- Shleifer, A. y R.W. Vishny (1993), "Corruption", *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), pp. 599-617, DOI: 10.2307/2118402.
- Soifer, H.D. (2013), "State Power and the Economic Origins of Democracy", *Studies in Comparative International Development*, 48(1), pp. 1-22, DOI: 10.1007/s12116-012-9122-7.
- Solé-Ollé, A. y P. Sorribas (2017), "Trust No More? On the Lasting Effects of Corruption Scandals", *European Journal of Political Economy*, DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2017.12.003.
- Soss, J. (1999), "Lessons of Welfare: Policy Design, Political Learning, and Political Action", *American Political Science Review*, 93(2), pp. 363-380.
- Soss, J. (2005), "Making Clients and Citizens Welfare Policy as a Source of Status, Belief, and Action", en A.L. Schneider y H. Ingram (eds.), *Deserving and Entitled: Social Constructions and Public Policy*, Albany, State University of New York Press, pp. 291-328.
- Soss, J. y S.F. Schram (2007), "A Public Transformed? Welfare Reform as Policy Feedback", *American Political Science Review*, 101(1), pp. 111-127, DOI: 10.1017/s0003055407070049.
- Stringhini, S., S. Thomas, P. Bidwell, T. Mtui y A. Mwisongo (2009), "Understanding Informal Payments in Health Care: Motivation of Health Workers in Tanzania", *Human Resources for Health*, 7, DOI: 10.1186/1478-4491-7-53.
- Svallfors, S. (2010), "Policy Feedback, Generational Replacement, and Attitudes to State Intervention: Eastern and Western Germany, 1990-2006", *European Political Science Review*, 2(1), pp. 119-135, DOI: 10.1017/S1755773909990257.
- Svallfors, S. (2013), "Government Quality, Egalitarianism, and Attitudes to Taxes and Social Spending: A European Comparison", *European Comparison. European Political Science Review*, 5(3), pp. 363-380.

- Theiss, M. y A. Kurowska (2018), "Being Denied and Granted Social Welfare and the Propensity to Protest", *Acta Politica*, 54, pp. 458-478, DOI: 10.1057/s41269-018-0084-2.
- Tornarolli, L., M. Ciaschi y L. Galeano (2018), "Income Distribution in Latin America. The Evolution in the Last 20 Years: A Global Approach", documento de trabajo 234, Universidad Nacional de La Plata-CEDLAS.
- Transparency International (2009), *Anti-corruption Plain Language Guide*, disponible en: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide [fecha de consulta: 20 de marzo, 2020].
- Warren, M.E. (2006), "Political Corruption as Duplicitous Exclusion", *ps, Political Science & Politics*, 39(4), pp. 803-807.
- Yamamura, E. (2014), "Trust in Government and Its Effect on Preferences for Income Redistribution and Perceived Tax Burden", *Economics of Governance*, 15(1), pp. 71-100.
- Zhllima, E., D. Imami, K. Rama y A. Shahini (2018), "Corruption in Education during Socialism and the Postsocialist Transition: The Case of Albania", *Region*, 7(2), pp. 51-70, DOI: 10.1353/reg.2018.0016.

APÉNDICE

CUADRO A1. Experiencias de soborno en servicios sociales y apoyo a la redistribución

	Modelo A1	Modelo A2	Modelo A3
Sobornos	-0.162*** (0.035)	-0.137*** (0.040)	-0.130*** (0.040)
Riqueza patrimonial		0.055 (0.066)	-0.085 (0.076)
Desempleado		0.072 (0.047)	0.060 (0.047)
Situación económica personal (= igual)		-0.056 (0.037)	-0.056 (0.037)
Situación económica personal (= peor)		-0.017 (0.041)	-0.014 (0.042)
Situación económica nacional (= igual)		-0.150*** (0.039)	-0.152*** (0.040)
Situación económica nacional (= peor)		-0.072* (0.043)	-0.068 (0.043)
Ideología		-0.018*** (0.005)	-0.017*** (0.005)
Religiosidad		0.231*** (0.031)	0.241*** (0.031)
Educación			0.013*** (0.004)
Urbano			0.021 (0.038)
Niños en el hogar			0.055 (0.119)
Mujer			-0.056** (0.025)
Edad			0.005 (0.006)
Edad ²			-0.000 (0.000)
Constante	0.083 (0.063)	0.119 (0.089)	-0.088 (0.188)
Observaciones	35 365	28 495	28 495
Pseudo R ²	0.034	0.036	0.037
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos año	Sí	Sí	Sí

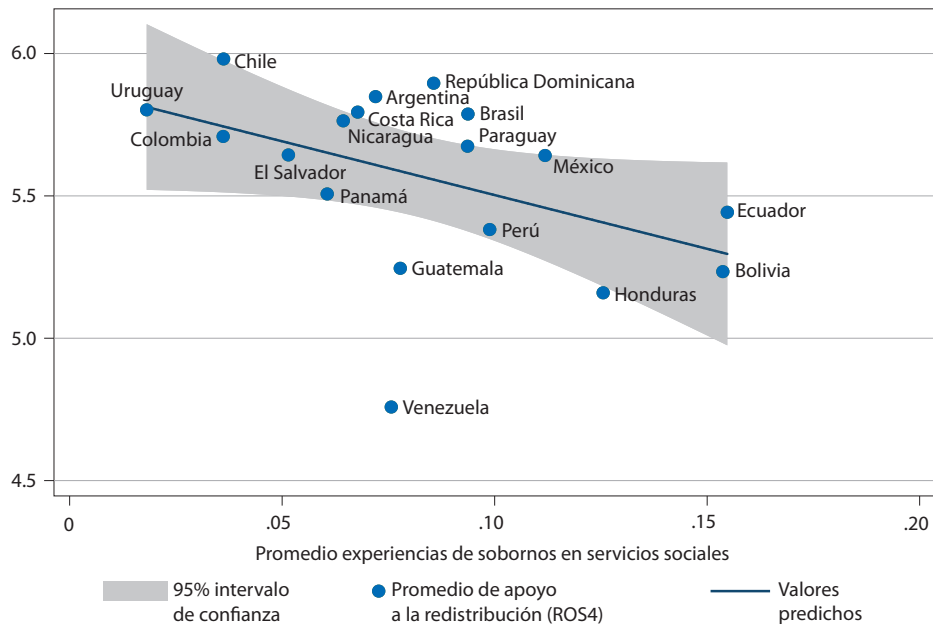
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es el apoyo a la redistribución, 1 = apoya la redistribución, 0 = no apoya la redistribución. Recodifico la variable ROS4: 1 a 6 = 0, 7 = 1. Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

CUADRO A2. Experiencias de soborno en servicios sociales y apoyo a la redistribución

	Modelo A4 ROS4	Modelo A5 ROS4	Modelo A6 ROS4
Sobornos	-0.255*** (0.028)	-0.224*** (0.031)	-0.209*** (0.032)
Riqueza patrimonial		-0.045 (0.055)	-0.197*** (0.063)
Desempleado		0.080** (0.039)	0.064 (0.039)
Situación económica personal (= igual)		-0.064** (0.028)	-0.063** (0.028)
Situación económica personal (= peor)		-0.109*** (0.032)	-0.100*** (0.032)
Situación económica nacional (= igual)		-0.109*** (0.030)	-0.115*** (0.030)
Situación económica nacional (= peor)		-0.131*** (0.033)	-0.132*** (0.033)
Ideología		-0.011** (0.005)	-0.010** (0.005)
Religiosidad		0.163*** (0.023)	0.173*** (0.022)
Educación			0.019*** (0.003)
Urbano			-0.025 (0.030)
Niños en el hogar			0.104 (0.097)
Mujer			-0.028 (0.020)
Edad			0.006 (0.005)
Edad ²			-0.000 (0.000)
Constante	6.036*** (0.050)	6.187*** (0.071)	5.907*** (0.157)
Observaciones	35 365	28 495	28 495
Pseudo R ²	0.055	0.057	0.059
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos año	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es el apoyo a la redistribución, ROS4 de LAPOP: 1-7. Especifico regresiones lineales de mínimos cuadrados con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

GRÁFICA A1. Diagrama de dispersión: promedio de experiencias de sobornos en servicios sociales agregados a nivel país y apoyo a la redistribución



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>.

CUADRO A3. Experiencias de soborno en servicios sociales, riqueza patrimonial y apoyo a la redistribución

	Modelo A7	Modelo A8	Modelo A9
Sobornos	-0.324*** (0.071)	-0.322*** (0.080)	-0.317*** (0.080)
Riqueza	-0.134** (0.067)	-0.104 (0.076)	-0.263*** (0.087)
Sobornos x riqueza	0.158 (0.135)	0.176 (0.150)	0.192 (0.151)
Desempleado		0.111** (0.051)	0.098* (0.052)
Situación económica personal (= igual)		-0.094** (0.039)	-0.095** (0.039)
Situación económica personal (= peor)		-0.098** (0.043)	-0.092** (0.043)
Situación económica nacional (= igual)		-0.219*** (0.043)	-0.223*** (0.043)
Situación económica nacional (= peor)		-0.207*** (0.046)	-0.204*** (0.046)
Ideología		-0.017*** (0.005)	-0.016*** (0.005)
Religiosidad		0.215*** (0.030)	0.227*** (0.030)
Educación			0.020*** (0.004)
Urbano			-0.041 (0.040)
Niños en el hogar			0.066 (0.112)
Mujer			-0.063** (0.026)
Edad			0.006 (0.006)
Edad ²			-0.000 (0.000)
Constante	1.008*** (0.077)	1.235*** (0.096)	1.000*** (0.185)
Observaciones	35 365	28 495	28 495
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos año	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es el apoyo a la redistribución, 1 = apoya la redistribución, 0 = no apoya la redistribución. Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

CUADRO A4. Experiencias de soborno en servicios sociales, riqueza patrimonial y apoyo a la redistribución. Desigualdad entre grupos baja y alta

Desigualdad entre grupos en el país	Modelo A10	Modelo A11	Modelo A12	Modelo A13
	Baja	Alta	Baja	Alta
Sobornos	-0.411*** (0.133)	-0.208*** (0.042)	-0.798*** (0.257)	-0.288*** (0.084)
Riqueza patrimonial	-0.257 (0.257)	-0.216*** (0.082)	-0.402 (0.270)	-0.254*** (0.091)
Sobornos x riqueza			0.765 (0.472)	0.162 (0.158)
Desempleado	0.332* (0.187)	0.074 (0.054)	0.337* (0.186)	0.076 (0.054)
Situación económica personal (= igual)	0.116 (0.115)	-0.114*** (0.042)	0.109 (0.115)	-0.114*** (0.042)
Situación económica personal (= peor)	0.049 (0.140)	-0.099** (0.045)	0.050 (0.140)	-0.100** (0.045)
Situación económica nacional (= igual)	-0.195 (0.164)	-0.223*** (0.045)	-0.196 (0.164)	-0.223*** (0.045)
Situación económica nacional (= peor)	-0.157 (0.161)	-0.201*** (0.048)	-0.155 (0.161)	-0.201*** (0.048)
Ideología	-0.024 (0.021)	-0.016*** (0.006)	-0.025 (0.020)	-0.016*** (0.006)
Religiosidad	0.446*** (0.098)	0.205*** (0.031)	0.446*** (0.098)	0.205*** (0.031)
Educación	-0.004 (0.013)	0.022*** (0.004)	-0.003 (0.013)	0.022*** (0.004)
Urbano	0.275** (0.120)	-0.072* (0.041)	0.278** (0.120)	-0.072* (0.041)
Niños en el hogar		0.059 (0.112)		0.065 (0.112)
Mujer	-0.180** (0.087)	-0.055** (0.027)	-0.184** (0.087)	-0.055** (0.027)
Edad	-0.030 (0.025)	0.008 (0.006)	-0.031 (0.025)	0.008 (0.006)
Edad ²	0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
Constante	1.099** (0.544)	0.963*** (0.192)	1.182** (0.538)	0.973*** (0.192)
Observaciones	2749	25746	2749	25746
Pseudo R ²	0.066	0.036	0.066	0.036
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es el apoyo a la redistribución, 1 = apoya la redistribución, 0 = no apoya la redistribución. Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

CUADRO A5. Experiencias de soborno en servicios sociales, riqueza patrimonial y apoyo a la redistribución. Beneficiarios y no beneficiarios de políticas sociales

	Modelo A14	Modelo A15	Modelo A16	Modelo A17
Beneficiarios de políticas sociales	Beneficiarios	No beneficiarios	Beneficiarios	No beneficiarios
Sobornos	-0.361*** (0.071)	-0.172*** (0.044)	-0.597*** (0.152)	-0.196** (0.091)
Riqueza patrimonial	-0.291** (0.137)	-0.176* (0.093)	-0.417*** (0.151)	-0.187* (0.103)
Sobornos x riqueza			0.502* (0.282)	0.047 (0.166)
Desempleado	0.062 (0.093)	0.118* (0.061)	0.066 (0.093)	0.118* (0.061)
Situación económica personal (= igual)	-0.040 (0.068)	-0.115** (0.048)	-0.043 (0.068)	-0.115** (0.048)
Situación económica personal (= peor)	-0.024 (0.078)	-0.112** (0.053)	-0.029 (0.077)	-0.112** (0.053)
Situación económica nacional (= igual)	-0.316*** (0.082)	-0.179*** (0.050)	-0.318*** (0.082)	-0.179*** (0.050)
Situación económica nacional (= peor)	-0.280*** (0.084)	-0.165*** (0.054)	-0.280*** (0.084)	-0.165*** (0.054)
Ideología	-0.015 (0.010)	-0.017*** (0.006)	-0.015 (0.010)	-0.017*** (0.006)
Religiosidad	0.165*** (0.059)	0.248*** (0.034)	0.168*** (0.059)	0.248*** (0.034)
Educación	0.008 (0.007)	0.023*** (0.005)	0.009 (0.007)	0.023*** (0.005)
Urbano	0.025 (0.067)	-0.074 (0.046)	0.026 (0.067)	-0.074 (0.045)
Niños en el hogar	-0.376 (0.273)	0.139 (0.122)	-0.347 (0.272)	0.140 (0.123)
Mujer	-0.129** (0.050)	-0.041 (0.031)	-0.130** (0.050)	-0.042 (0.031)
Edad	0.002 (0.011)	0.007 (0.007)	0.003 (0.011)	0.007 (0.007)
Edad ²	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
Constante	1.696*** (0.378)	0.782*** (0.217)	1.711*** (0.376)	0.785*** (0.217)
Observaciones	8 282	20 212	8 282	20 212
Pseudo R ²	0.047	0.037	0.048	0.037
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es el apoyo a la redistribución, 1 = apoya la redistribución, 0 = no apoya la redistribución. Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

CUADRO A6. Experiencias de soborno en servicios sociales y apoyo a la redistribución. Identidad étnica, trabajo informal y experiencias de soborno en servicios públicos no sociales

	Modelo A18 Informalidad	Modelo A19 Identidad étnica	Modelo A20 Sobornos en otros servicios	Modelo A21 Todos
Sobornos servicios sociales	-0.342*** (0.106)	-0.230*** (0.041)	-0.218*** (0.040)	-0.393*** (0.111)
Trabajador informal	-0.162* (0.096)			-0.178* (0.098)
Mestizo		0.071* (0.039)		0.029 (0.111)
Indígena		0.118 (0.072)		0.153 (0.202)
Negro		0.036 (0.068)		-0.055 (0.218)
Mulato		0.060 (0.076)		0.499 (0.318)
Oriental		0.086 (0.154)		-0.376 (0.298)
Otro		-0.068 (0.098)		0.124 (0.368)
Sobornos servicios no sociales			-0.027 (0.035)	0.103 (0.103)
Riqueza patrimonial	-0.421* (0.222)	-0.215*** (0.080)	-0.214*** (0.078)	-0.434* (0.226)
Desempleado	0.527* (0.273)	0.091* (0.052)	0.097* (0.052)	0.500* (0.275)
Situación económica personal (= igual)	-0.078 (0.104)	-0.092** (0.040)	-0.095** (0.039)	-0.099 (0.108)
Situación económica personal (= peor)	-0.083 (0.130)	-0.074* (0.044)	-0.090** (0.043)	-0.108 (0.132)
Situación económica nacional (= igual)	-0.134 (0.130)	-0.207*** (0.044)	-0.224*** (0.043)	-0.112 (0.131)
Situación económica nacional (= peor)	-0.069 (0.142)	-0.190*** (0.047)	-0.204*** (0.046)	-0.062 (0.142)
Ideología	-0.024 (0.020)	-0.016*** (0.006)	-0.016*** (0.005)	-0.023 (0.019)
Religiosidad	0.272*** (0.082)	0.232*** (0.030)	0.227*** (0.030)	0.277*** (0.083)

CUADRO A6. Experiencias de soborno en servicios sociales y apoyo a la redistribución. Identidad étnica, trabajo informal y experiencias de soborno en servicios públicos no sociales (continuación)

	Modelo A18 Informalidad	Modelo A19 Identidad étnica	Modelo A20 Sobornos en otros servicios	Modelo A21 Todos
Educación	-0.007 (0.012)	0.018*** (0.004)	0.020*** (0.004)	-0.009 (0.012)
Urbano	0.115 (0.113)	-0.054 (0.041)	-0.041 (0.040)	0.119 (0.113)
Niños en el hogar		0.034 (0.113)	0.061 (0.112)	
Mujer	-0.115 (0.077)	-0.071*** (0.026)	-0.066** (0.026)	-0.102 (0.079)
Edad	0.013 (0.020)	0.005 (0.006)	0.006 (0.006)	0.015 (0.020)
Edad ²	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
Constante	0.940** (0.459)	1.001*** (0.190)	0.993*** (0.185)	0.852* (0.478)
Observaciones	3 278	27 561	28 495	3 224
Pseudo R ²	0.057	0.039	0.038	0.060
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* Para medir la informalidad sigo el procedimiento usado en Berens (2015) y en Berens y Kemmerling (2019) codificando como trabajadores informales a quienes cumplen con dos requisitos: por una parte, seleccionan la categoría “Trabajador(a) por cuenta propia” de la pregunta OCU-PIA y, por otra, no tienen seguro de salud (pregunta SAL1 de la ronda 2010 de LAPOP). Capturo la identidad étnica con las respuestas a la pregunta ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u otra? Mido las experiencias de sobornos en la interacción de los ciudadanos con áreas no sociales del Estado codificando como “1” a todos los sujetos que respondieron “sí” a cualquiera de las siguientes preguntas: EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima (o soborno) en los últimos 12 meses?; EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una coima (o soborno)?; o EXC11. Para tramitar algo en el municipio, como un permiso, por ejemplo, durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley? La variable dependiente es el apoyo a la redistribución, 1 = apoya la redistribución, 0 = no apoya la redistribución. Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

CUADRO A7. Experiencias de soborno en servicios sociales, riqueza patrimonial y apoyo a la redistribución. Identidad étnica, trabajo informal y experiencias de soborno en servicios públicos no sociales

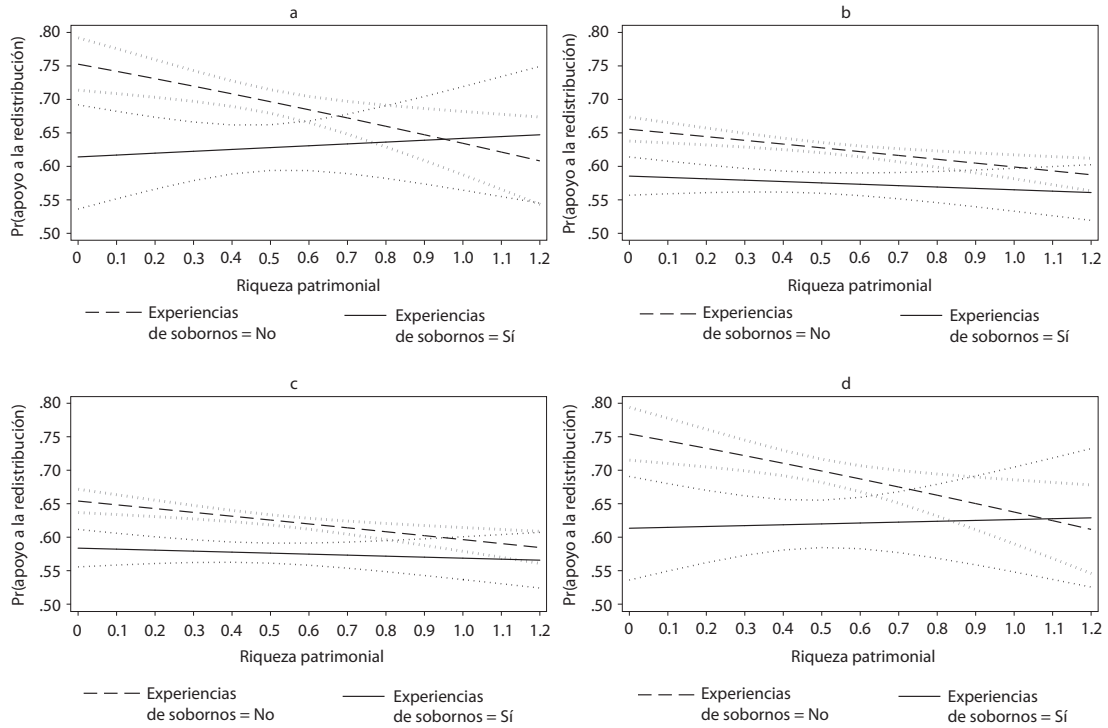
	Modelo A22 Informalidad	Modelo A23 Identidad étnica	Modelo A24 Sobornos en otros servicios	Modelo A25 Todos
Sobornos servicios sociales	-0.695*** (0.236)	-0.313*** (0.082)	-0.314*** (0.080)	-0.709*** (0.237)
Riqueza patrimonial	-0.601** (0.248)	-0.253*** (0.089)	-0.258*** (0.087)	-0.597** (0.253)
Sobornos x riqueza	0.729* (0.426)	0.165 (0.152)	0.194 (0.151)	0.657 (0.423)
Trabajador informal	-0.160* (0.097)			-0.176* (0.098)
Mestizo		0.071* (0.039)		0.029 (0.112)
Indígena		0.119* (0.072)		0.159 (0.204)
Negro		0.036 (0.068)		-0.053 (0.217)
Mulato		0.060 (0.076)		0.470 (0.317)
Oriental		0.085 (0.154)		-0.390 (0.300)
Otro		-0.068 (0.098)		0.130 (0.372)
Sobornos servicios no sociales			-0.027 (0.035)	0.096 (0.103)
Desempleado	0.542** (0.273)	0.092** (0.052)	0.099* (0.052)	0.515* (0.275)
Situación económica personal (= igual)	-0.085 (0.105)	-0.092** (0.040)	-0.096** (0.039)	-0.105 (0.108)
Situación económica personal (= peor)	-0.085 (0.130)	-0.075* (0.044)	-0.091** (0.043)	-0.109 (0.132)
Situación económica nacional (= igual)	-0.138 (0.130)	-0.207*** (0.044)	-0.224*** (0.043)	-0.116 (0.132)
Situación económica nacional (= peor)	-0.072 (0.141)	-0.190*** (0.047)	-0.204*** (0.046)	-0.064 (0.142)
Ideología	-0.024 (0.019)	-0.016*** (0.006)	-0.016*** (0.005)	-0.023 (0.019)
Religiosidad	0.272*** (0.082)	0.232*** (0.030)	0.227*** (0.030)	0.277*** (0.083)
Educación	-0.006 (0.012)	0.018*** (0.004)	0.020*** (0.004)	-0.008 (0.012)
Urbano	0.114 (0.113)	-0.054 (0.041)	-0.041 (0.040)	0.119 (0.114)
Niños en el hogar		0.040 (0.113)	0.067 (0.112)	

CUADRO A7. Experiencias de soborno en servicios sociales, riqueza patrimonial y apoyo a la redistribución. Identidad étnica, trabajo informal y experiencias de soborno en servicios públicos no sociales

	Modelo A22 Informalidad	Modelo A23 Identidad étnica	Modelo A24 Sobornos en otros servicios	Modelo A25 Todos
Mujer	-0.114 (0.078)	-0.072*** (0.026)	-0.066** (0.026)	-0.102 (0.079)
Edad	0.014 (0.020)	0.005 (0.006)	0.006 (0.006)	0.015 (0.020)
Edad ²	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
Constante	1.021** (0.462)	1.011*** (0.191)	1.005*** (0.186)	0.923* (0.481)
Observaciones	3 278	27 561	28 495	3 224
Pseudo R ²	0.058	0.039	0.038	0.060
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es el apoyo a la redistribución, 1 = apoya la redistribución, 0 = no apoya la redistribución. Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

GRÁFICA A2. Efectos de experiencias de sobornos en servicios sociales y riqueza patrimonial sobre el apoyo a la redistribución, modelos con diferentes grupos de controles. Efectos marginales con ic de 90 por ciento



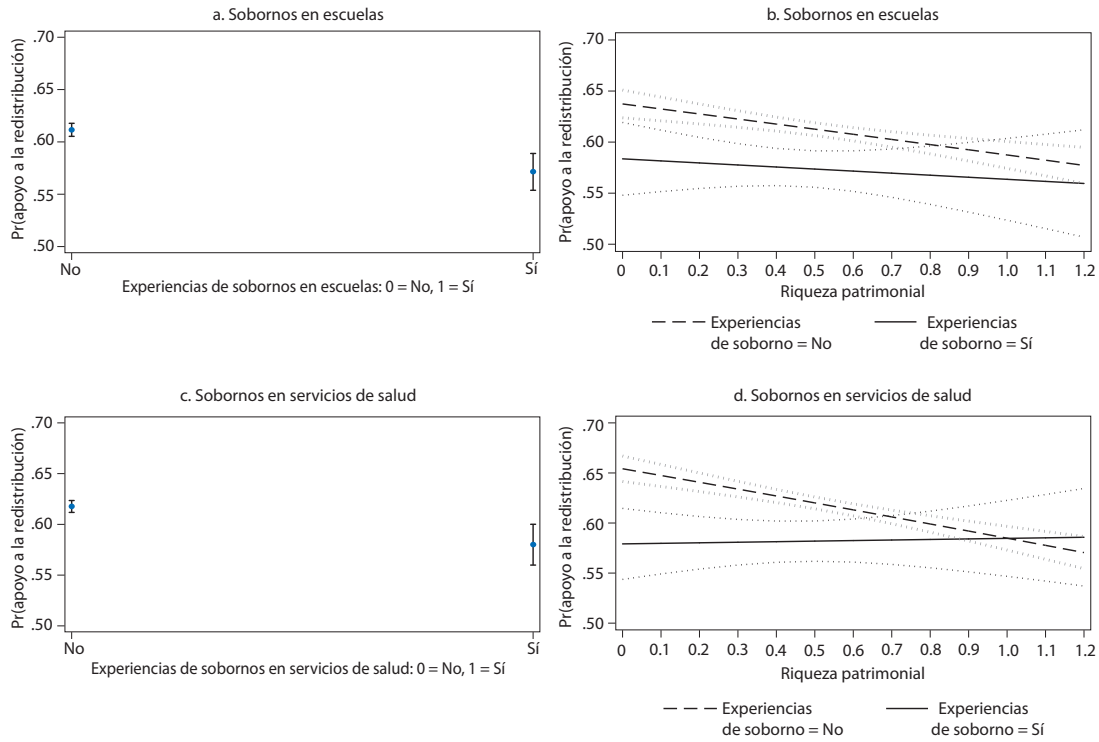
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2012, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. Se basa en la estimación de los modelos A22 (a), A23 (b), A24 (c) y A25 (d) en el cuadro A7 de este apéndice.

CUADRO A8. Experiencias de sobornos en servicios de salud o en escuelas, riqueza patrimonial y apoyo a la redistribución

	Modelo A26	Modelo A27	Modelo A28	Modelo A29
	Escuelas	Servicios de salud	Escuelas	Servicios de salud
Sobornos escuelas	-0.175*** (0.046)	-0.238** (0.095)		
Sobornos salud			-0.165*** (0.051)	-0.334*** (0.096)
Riqueza patrimonial	-0.211*** (0.063)	-0.222*** (0.064)	-0.285*** (0.057)	-0.310*** (0.059)
Sobornos escuelas x riqueza		0.135 (0.178)		
Sobornos salud x riqueza				0.334** (0.168)
Desempleado	0.084* (0.043)	0.084* (0.043)	0.139*** (0.035)	0.140*** (0.035)
Situación económica personal (= igual)	-0.109*** (0.031)	-0.110*** (0.031)	-0.095*** (0.028)	-0.095*** (0.028)
Situación económica personal (= peor)	-0.112*** (0.036)	-0.112*** (0.036)	-0.118*** (0.031)	-0.119*** (0.031)
Situación económica nacional (= igual)	-0.191*** (0.036)	-0.191*** (0.036)	-0.182*** (0.031)	-0.182*** (0.031)
Situación económica nacional (= peor)	-0.180*** (0.038)	-0.180*** (0.038)	-0.188*** (0.034)	-0.188*** (0.034)
Ideología	-0.013*** (0.005)	-0.013*** (0.005)	-0.013*** (0.004)	-0.013*** (0.004)
Religiosidad	0.228*** (0.025)	0.228*** (0.025)	0.197*** (0.023)	0.197*** (0.023)
Educación	0.017*** (0.003)	0.017*** (0.003)	0.020*** (0.003)	0.020*** (0.003)
Urbano	-0.047 (0.033)	-0.047 (0.033)	-0.043 (0.032)	-0.043 (0.032)
Niños en el hogar	0.249* (0.141)	0.249* (0.141)	0.194*** (0.038)	0.193*** (0.038)
Mujer	-0.063*** (0.021)	-0.063*** (0.021)	-0.053*** (0.019)	-0.054*** (0.019)
Edad	0.015*** (0.005)	0.015*** (0.005)	0.004 (0.003)	0.004 (0.003)
Edad ²	-0.000*** (0.000)	-0.000*** (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
Constante	0.566*** (0.194)	0.571*** (0.194)	0.938*** (0.099)	0.953*** (0.099)
Observaciones	41 943	41 943	52 873	52 873
Pseudo R ²	0.039	0.039	0.037	0.037
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es el apoyo a la redistribución, 1 = apoya la redistribución, 0 = no apoya la redistribución. Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

GRÁFICA A3. Efectos de experiencias de sobornos en escuelas o en servicios de salud y riqueza sobre el apoyo a la redistribución. Efectos marginales con ic de 90 por ciento



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2012, disponibles en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. Se basa en la estimación de los modelos A26 (a), A27 (b), A28 (c) y A29 (d) en el cuadro A8 de este apéndice.

CUADRO A9. Experiencias de soborno en servicios sociales, riqueza patrimonial y apoyo a la provisión estatal de servicios de salud

	Modelo A30	Modelo A31	Modelo A32
Sobornos	-0.463*** (0.118)	-0.503*** (0.133)	-0.503*** (0.133)
Riqueza patrimonial	-0.058 (0.123)	0.053 (0.137)	-0.115 (0.156)
Sobornos x riqueza	0.287 (0.211)	0.384* (0.228)	0.408* (0.229)
Desempleado		0.076 (0.100)	0.064 (0.100)
Situación económica personal (= igual)		-0.112* (0.061)	-0.114* (0.061)
Situación económica personal (= peor)		-0.123* (0.072)	-0.118 (0.072)
Situación económica nacional (= igual)		-0.176** (0.070)	-0.179** (0.071)
Situación económica nacional (= peor)		-0.032 (0.074)	-0.031 (0.075)
Ideología		-0.004 (0.009)	-0.003 (0.009)
Religiosidad		0.335*** (0.050)	0.352*** (0.051)
Educación			0.019*** (0.007)
Urbano			-0.040 (0.074)
Mujer			-0.097** (0.042)
Edad			0.018** (0.009)
Edad ²			-0.000** (0.000)
Constante	1.330*** (0.121)	1.184*** (0.152)	0.806*** (0.246)
Observaciones	16 796	13 128	13 128
R ²	0.049	0.066	0.052
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí
Efectos fijos país	Sí	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Encuestas LAPOP 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018, disponible en <http://www.vanderbilt.edu/lapop>. *Nota:* La variable dependiente es el apoyo a la provisión estatal de servicios de salud (en oposición al sector privado). Pregunta de LAPOP ROS6. “El Estado (país), más que el sector privado, debería ser el principal responsable de proveer los servicios de salud. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?” Especifico regresiones logísticas con efectos fijos por país y por año con errores estándar robustos agrupados a nivel de municipio (entre paréntesis). *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.